

Trujillo: neoliberalismo, conflicto armado y cambios productivos¹

María Fernanda Sañudo Pazos²

Juan Felipe Gómez Guerrero³

Desde hace más de 3 décadas los países de América Latina se han constituido en el escenario de una serie de reformas en diversas dimensiones que han transitado entre los Programas de Ajuste Estructural (1980-1990), las reformas del Estado y el cambio institucional (1990-2007) y los procesos de privatización territorial (2000) (Dávalos, 2011). En este contexto, el sector rural fue prioritario para dicha intervención. Gudynas y Acosta (2011) refieren cómo en la primera etapa las reformas fueron esencialmente de rediseño y cambio en las políticas de comercio exterior, con miras a establecer el escenario para liberalización del mercado. En la segunda (1990-2007), a la par del debilitamiento de los mecanismos de apoyo a los productores rurales, se rediseñaron las políticas rurales con el objetivo de favorecer y fortalecer al sector agroexportador⁴. Y, en los últimos años con el “boom de los commodities” la orientación de las políticas ha sido hacia la “privatización de los territorios” es decir de los recursos naturales, la vida y el agua (Dávalos, 2011, p. 58).

En este sentido, la implementación de las políticas neoliberales ha coadyuvado a que en los países de la región se realicen (bajo la influencia del capital privado y transnacional) cambios en las políticas de desarrollo rural (y en otras) con el objetivo de consolidar, por un lado, territorialidades productivas específicas (siembra de cereales, palma africana, caña de azúcar, entre otras) y por el otro reorientar las actividades de los sectores campesinos (quienes se habían especializado en la producción de alimentos). Estos últimos pasarían a componer el grueso del ejército de reserva, necesario para consolidar el modelo agroempresarial, y/o a ser vinculados a través de cadenas o proyectos productivos en dinámicas económicas

¹ Este documento fue elaborado en el marco de la Red de Observatorios de la Deuda Social de Universidades Católicas de América Latina (RED ODSAL), con sede en la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL).

Agradecemos los aportes de Juan David Copete y Laura Piña para la construcción de este documento.

² Doctora en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Complutense de Madrid (2014). Magister en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana (2004). Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia (2001). Investigadora y Docente del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana.

³ Politólogo de la Universidad del Rosario (2017). Asistente de Investigación del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana.

⁴ En palabras de Tobasura (2011) “Con el nuevo modelo, la estructura del sector cambia radicalmente. Se fortalecen los cultivos tropicales de exportación especialmente a mediados de la década de 1990, se dinamiza la producción pecuaria jalonada por la avicultura y la porcicultura, debido a la urbanización del país, los cambios en los hábitos de consumo y los avances tecnológicos en la avicultura y la porcicultura. La producción bovina, salvo casos excepcionales, mantuvo su estructura tradicional con escasa tecnología y poca contratación de mano de obra. La producción de no transables, pese a la protección natural que tienen, reduce su participación como consecuencia de la masiva importación de alimentos y la irrupción de las multinacionales en la comercialización de éstos y desaparecen los cultivos de sustitución de importaciones” (p.646).

especializadas. Tanto la producción de territorialidades especializadas productivamente, como la producción de un ejército de reserva o de la articulación del campesinado a cadenas o proyectos productivos, se constituyen en condiciones para la acumulación de capital en agentes transnacionales.

En Colombia, específicamente desde comienzos de los 90, el sector rural enfrentó un giro productivo abrupto, sobre todo en lo concerniente a las políticas de redistribución de la tierra (reforma agraria) y de apoyo a la economía campesina⁵. Las políticas neoliberales apuntaron a la reorganización territorial de lo rural y de sus procesos socioeconómicos con la finalidad de reconvertir cultivos de sustitución de importaciones para el fortalecimiento del sector agroexportador⁶ (Tobasura, 2011). Esta reorganización territorial de lo rural y de los procesos socioeconómicos, sobre la que señala Tobasura (2011), en algunas regiones del país, se impulsó a través del uso de la violencia armada e ilegal.

En este sentido, ha existido una estrecha conexión entre los reacomodamientos de los patrones productivos en varias zonas del país y la irregularización de la guerra. Esta conexión proponemos que debe leerse en tres vías:

- La primera vía considera la siguiente hipótesis: el conflicto armado se constituye en una estrategia para consolidar el modelo de desarrollo neoliberal y posibilitar las condiciones para la inversión privada y transnacional.

En el marco de una primera etapa, que podríamos identificar de consolidación del modelo neoliberal en el país (1990–2003) la implementación de cultivos agroindustriales coincidió con el aumento desmedido de los grupos paramilitares, los desplazamientos forzados y las masacres. Bajo el argumento de “quitar el agua al pez” y como justificación para la expansión y la consolidación del modelo agroexportador, se despoblaron a la fuerza amplias zonas del país, proceso llevado a cabo principalmente por grupos paramilitares. En el marco de una segunda etapa (2003-2013), durante los gobiernos de Uribe y Santos, se instauró en el país el modelo extractivista. Es de resaltar cómo en el Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno de Santos (2010–2014, llamado “Prosperidad para todos”), se estableció la locomotora minero energética como una de las

⁵ De acuerdo con Fajardo (2002) este proceso “coincid[ió] con la desaparición paulatina de los recursos públicos asignados al sector, los cuales pasaron del 4,8% del presupuesto nacional en 1990 al 0,8% en el 2000” (p.2 citando a Contraloría General de la República, 2002). El nuevo modelo trajo como consecuencia la disminución considerable de la producción de alimentos en el país y el aumento masivo de su importación.

⁶ A través de reformas institucionales y la creación de programas de apoyo, el Estado ha facilitado a los sectores agroindustriales y agroexportadores mayor acceso a los recursos productivos. A través de programas como Agro Ingreso Seguro “actores con mayor capacidad económica como los gremios se beneficiaron más que otros grupos de la sociedad rural de grandes cantidades de recursos públicos” (PNUD, 2011, p. 324). Además, en algunas ocasiones los mismos actores usaron la violencia armada como estrategia de despojo, cuestión que incidió en la reconcentración de la tierra en pocas manos.

estrategias para alcanzar el desarrollo y superar la pobreza. Sin embargo, según el Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz, (2012) “el 80% de las violaciones de los derechos humanos [-DDHH-] que han ocurrido en Colombia en los últimos diez años se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares” (p. 5 citando a Sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional Minera Minercol (Sintramincerol), citado por PBI Colombia, 2011, p. 6.). Este proceso ha dado lugar a transformaciones importantes en el país en lo referente a cuestiones como el acceso a la tierra, su control y propiedad; el acceso, uso y control de los recursos naturales; los modos y actividades de producción económica local; la relación que pobladores y pobladoras tienen con el territorio y el sentido que le dan a este y sobre la organización jurídica, social y política que sustenta esta relación; la institucionalidad y la gobernanza.

- En cuanto a la segunda vía, existe una estrecha relación entre los actos de violencia perpetrados por los actores armados y la exacerbación de los problemas producto de la crisis de la economía campesina. Tal como se especifica en algunos apartes de este documento, a finales de los 80’s el apoyo estatal a la economía campesina comenzó a decaer. En palabras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2011) “Entre los años 1990 y principios de los 2000, el sector vio fenecer gran parte de los programas institucionales creados en décadas pasadas” (p. 305). Esta instancia señala cómo, por ejemplo, el programa de reforma agraria fue reemplazado por la modalidad de mercado de tierras, el programa de asistencia técnica gratuita a pequeños productores finalizó, y “El crédito se vio encarecido con el desmonte de subsidios financieros y con el desmonte de la Caja Agraria” (PNUD, 2011, p. 306). Guerrero (2009) agrega que “Finalmente y para completar el proceso de neoliberalización del campo, se procedió al desmonte, eliminación, fusión y sustitución de las entidades de apoyo a los pequeños productores” (p. 30).

La economía campesina hasta finales de los años 1980 era la responsable de la producción de por lo menos 60% de los alimentos del país (Bejarano, 1985). Esta producción, aún con la baja competitividad reconocida por autores como Machado, se sostenía, en gran parte, gracias a la existencia de una infraestructura institucional y de apoyos estatales para la producción. Con la reorientación de las políticas de desarrollo rural las unidades económicas campesinas perdieron o vieron deterioradas las siguientes condiciones: disponibilidad de los recursos productivos con apoyo estatal (subsidio para insumos, reforma agraria, transferencia de tecnología), capacidad de control de los recursos productivos, participación en canales de comercialización (precios de sustentación, protección a los productos nacionales), capacidad de inserción en los mercados y capacidad de controlar su participación en la cadena productiva, es decir en el destino de lo producido.

Este deterioro implicó una diversificación de actividades económicas como señala León (s.f.), quien plantea que el empleo rural durante la década de los noventa presentó “una ligera tendencia hacia la terciarización” proceso que tuvo correspondencia con “la disminución en el sector primario”. A manera de ejemplo, León (s.f.) resalta como a fines de los 90 “la agricultura llega a su nivel más bajo en la estructura del empleo rural con un 55.1%” (p. 10).

El desmonte del apoyo estatal a la economía campesina y su consecuencia directa: el incremento de la pobreza rural, no pueden entenderse al margen de la profundización de la concentración de la propiedad durante la década de los 90. En este sentido y de acuerdo con el PNUD (2011) a mediados de la década de los noventa “se tenía una estructura con altos índices de concentración de la propiedad, una fuerte fragmentación del minifundio, y la mediana propiedad había iniciado un breve ascenso con el desarrollo de la agricultura comercial” (p. 224).

A este panorama hay que sumarle la consolidación del narcotráfico y con ello la definitiva emergencia e institucionalización de los grupos paramilitares, entendiendo a estos como una estrategia armada para la acumulación de tierras. En palabras de Díaz y Otálora (2000) “El binomio paramilitares – narcotraficantes propició la relativización, es decir, la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de un solo propietario, mediante tácticas como las intimidaciones, masacres, desplazamientos forzados de población, entre otras tácticas de terror. En este contexto, estos (narcotraficantes) se apropiaron de “aproximadamente 5 millones de hectáreas de tierra”” (p. 24). Así mismo, Osorio y Villegas (2010) establecen que, como resultado de lo que se ha denominado la reconstrucción agraria para finales de la década del 2000 “(...) el 56% de los propietarios (2.200.000 de personas) tienen predios menores de 3 hectáreas y ocupan el 1,7% del territorio registrado catastralmente, en tanto que el 0,4 (2.428 personas) poseen 44 millones de hectáreas, esto es el 54% del territorio. Cerca de 700 mil hogares campesinos no tienen tierra” (p.21). Por otra parte, es de considerar que “cerca de 5,5 millones de hectáreas no están en manos de sus dueños legítimos, extensión que equivale al 10,8% de la superficie agropecuaria nacional” (Comisión de Seguimiento, 2009 citado por Osorio y Villegas, 2010, p.21).

De acuerdo con lo anterior y bajo la perspectiva de Mantilla (2012) observamos que en un contexto de precariedad productiva, la presencia de actores armados, en muchas ocasiones, con intereses económicos puntuales incidió en el agravamiento de la crisis. En este contexto no solo fue el bajo acceso a factores e insumos para la producción, sino que también los campesinos debieron enfrentar el despojo de sus tierras. A lo anterior debemos sumarle el incremento de la migración rural-urbana. Algunos de estos migrantes, tal como asegura Mantilla (2012), con el fin de sortear las

condiciones de pobreza y desempleo se integraron a las filas de los actores armados o se vincularon a la producción de cultivos ilícitos.

- La tercera vía de análisis, sobre la que damos cuenta en este aparte, es sobre cómo la presencia y control territorial por parte de actores del narcotráfico y de actores armados, quienes desplegaron repertorios de violencias simultáneas y sucesivas (asesinatos, masacres, intimidaciones, amenazas y persecuciones, tortura, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, confinamientos, robo de bienes, desplazamientos forzados) incidieron en la pérdida de la capacidad productiva del campesinado⁷. El control territorial que ejercieron a través de la violencia dio lugar a la privación “material y simbólica de bienes muebles e inmuebles, lugares y/o territorios sobre los que se ejercía algún uso y disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción de necesidades” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR] 2009). Bajo la perspectiva del concepto de acumulación por desposesión que propone Harvey (2005) este proceso dio lugar a la separación violenta entre las personas y los medios de producción, aspecto que contribuyó a la eliminación de los modos de producción y de consumos alternativos y a la desarticulación de los flujos socio-productivos endolocales. En sentido estricto, el conflicto armado contribuyó a la eliminación o debilitamiento de las condiciones, con las que el campesinado de la zona contaba, para generar su propia subsistencia y de acuerdo con Chayanov (1974), al desequilibrio entre producción y consumo.

En conexión con lo explicitado, y a diferencia del caso de Yacuanquer, los procesos de despojo de la capacidad productiva en Trujillo no pueden solamente entenderse como producto de la reorientación de las políticas de desarrollo rural en un contexto de neoliberalización de la economía, las cuales principalmente afectaron a la producción de café. A este escenario hay que conjugarle el deterioro del conflicto armado⁸, proceso que como veremos, coincide tanto con las dos crisis del café como con la crisis de la agricultura en general.

⁷ Recordemos que el despojo de la capacidad productiva es un concepto que proponemos con base en los presupuestos de Chayanov. La capacidad productiva hace referencia a la serie de condiciones con las que una estructura productiva determinada cuenta para mantener el equilibrio entre producción y consumo. De acuerdo con el autor, la definiremos como la serie de condiciones con las que cuenta la Unidad Económica Campesina para mantener el balance entre producción y consumo, entre las cuales se identifican la disponibilidad y el acceso a los factores y recursos productivos. Una mirada más amplia incluye como condiciones: la disponibilidad de los recursos productivos con apoyo estatal (subsidio para insumos, reforma agraria, transferencia de tecnología, semillas); la capacidad de control de los recursos productivos; control de los procesos de participación en los canales de comercialización (precios de sustentación, protección a los productos nacionales); y capacidad de inserción en los mercados y de control del destino de lo producido. También se debe considerar que la mayoría de los ingresos de la Unidad Económica Campesina deben provenir de su trabajo productivo (no asalariado), los cuales deben permitirles acceder por su cuenta a otros recursos productivos.

⁸ A finales de la década de los 80, el conflicto armado colombiano sufre un deterioro significativo, es decir un proceso de irregularización. Esta categorización del conflicto coincide con la tipificación

Las violaciones de Derechos Humanos registradas en el municipio, desde la década de los 80's hasta finales de la década del 2000, coadyuvaron a la crisis productiva que enfrentó la zona. Los efectos sobre el campesinado no sólo deben ser considerados en torno a las amenazas contra su vida, sino también contra su actividad económica y sus medios de subsistencia⁹. En este sentido el objetivo de este aparte es el de evidenciar cómo las acciones violentas ejecutadas por los diferentes actores armados que hicieron presencia en la zona exacerbaron el escenario de crisis que se configuró con los cambios y transformaciones que enfrentaron los productores de café, desde finales de los 80's y cómo este exacerbamiento evidenció procesos de despojo de la capacidad productiva del campesinado de la zona.

Tal como se especificó para el caso de Yacuanquer, para Trujillo la unidad de análisis corresponde a las unidades económicas campesinas que se configuran alrededor de la producción de café. En palabras de Palacios (2009) "La base de la caficultura campesina es la familia y la finca que formaban una unidad inseparable: el trabajo familiar es casi exclusivamente fuente de trabajo en la finca y la producción de la finca satisface las necesidades de subsistencia de la familia, definida social y culturalmente" (p. 68). Las dinámicas de producción, en las que se articulan estas unidades, dependen directamente de la disponibilidad de mano de obra¹⁰ familiar y de las inversiones que, a través de la Federación Nacional de Cafeteros -FNC-, hace el Estado con miras a mantener y/o regular la productividad. Estas unidades, hasta finales de los 80 producían "café para el mercado y alimentos para el autoconsumo" (Palacios, 2009, p.68). Las ganancias obtenidas por la venta de café les permitían el acceso a "otros alimentos que no se producían], así como vestuario, tabaco, licores" (Palacios, 2009, p.68).

Los efectos de la crisis del café (caída del Pacto de Cuotas) en conjunción con las acciones violentas de los armados, incidieron en la dinámica de estas unidades productivas. Estos dos factores en convergencia implicaron limitaciones en el acceso a factores e insumos para la producción, en las decisiones y prácticas productivas, en los procesos de comercialización, en la migración rural-urbana,

hecha por Kaldor (2001) para definir a las nuevas guerras o guerras degenerativas. La autora establece que estas se caracterizan por el resquebrajamiento del monopolio del Estado sobre la fuerza y la violencia legítima y organizada; la privatización de la violencia asociada al auge del crimen organizado y del paramilitarismo; el deterioro de la legitimidad política en un contexto de crisis económica, fiscal y corrupción; el control territorial por parte de actores armados a través del uso de la violencia con miras al control político de la población y económico del territorio; actividad militar descentralizada por parte de los actores armados; y mayores efectos de la guerra sobre la población civil.

⁹ Los medios de subsistencia responden a "(...) las habilidades, los activos (tanto materiales como sociales) y las actividades necesarias para los medios de vida. La subsistencia es sustentable cuando puede enfrentarse y recuperarse del estrés y la crisis y mantener o mejorar su capacidad y activos tanto en el presente como en el futuro, siempre y cuando sin perjudicar los recursos naturales básicos" (Chambers & Conway, 1991, citados por PNUD, s.f., p. 1)

¹⁰ Al respecto Palacios (2009) señala que "los miembros de la familia no trabajan fuera de la finca, no necesitan jornalear" (p.68).

entre otros: es decir en el despojo o deterioro de la capacidad productiva de lxs caficultorxs de la zona de estudio, específicamente del corregimiento del Tabor – Puente Blanco, Trujillo.

De acuerdo a lo explicitado hasta el momento (y, siguiendo la línea argumentativa usada para el caso de Yacuanquer) comenzaremos por evidenciar cómo en el municipio de Trujillo se configura una economía de tipo campesino ligada a la producción y comercialización del café a pequeña escala. Mostraremos como este modo de producción se fortalece, gracias a la presencia y acciones de la Federación Nacional de Cafeteros, a la vez que se deteriora en relación con las crisis cafeteras. Posteriormente demostraremos cómo la recomposición de la crisis, a través de acciones de acompañamiento de la Iglesia y de procesos organizativos socioeconómicos, se ven frenados por la presencia de los armados. Sobre la presencia discerniremos tres etapas. Por cada una de estas se identificará el impacto que las acciones violentas tuvieron sobre los procesos productivos locales y cómo esto impactó la capacidad productiva de los pobladores del corregimiento.

Breve caracterización de la zona de estudio

El municipio de Trujillo¹¹ se encuentra ubicado en del Valle del Cauca y pertenece a la subregión centro occidente del departamento (A la que también pertenecen Riofrío, Calima-El Darién, Vijes, Restrepo y Yotoco). El Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- (2014) propone considerar dos modalidades territoriales en dicho departamento: zona plana y zona de ladera. Con respecto a la primera a esta corresponden “los municipios o parte de los mismos que se encuentran ubicados geográficamente en el valle formado por el cruce del río Cauca entre las cordilleras occidental y central” (CNMH, 2014, p.35). En relación con la zona de ladera esta “comprende las cimas, laderas y vertientes de las cordilleras central y occidental; se encuentran entre los 1.000 y los 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar” (CNMH, 2014, p.35). La totalidad de los municipios cafeteros se encuentran ubicados en esta zona, incluido Trujillo. En este municipio, por su ubicación geográfica y configuración biofísica, se presenta una escala de pisos térmicos, los que han posibilitado el desarrollo tanto de actividades agrícolas (cultivo de café, plátano y mora, entre otros) como de ganadería y cría de especies menores.

En el Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- del municipio, correspondiente al 2001¹² (ver tabla 1) se estableció que el 25,7% del suelo se empleó en cultivos permanentes. Entre estos el café se posicionó como el principal, con un área sembrada de 5.978,1 ha. para el 2005. (CNRR, 2008).

¹¹Según el Plan de vida del corregimiento, construido por la misma comunidad en colaboración con el Instituto Mayor Campesino (IMCA): “El corregimiento El Tabor, del municipio de Trujillo fue fundado en el año de 1956 por los señores Salvador Betancourt y Marcelino Villareal. El nombre El Tabor fue tomado de la propiedad más grande que existía en el momento y que ofrecía trabajo. Sin embargo, comúnmente es conocido con el nombre de Puente Blanco debido a la existencia de un puente que lleva ese color”. (IMCA, 2011, p. 5)

¹²Usamos como referente el EOT del 2001, vigente hasta el 2013, dado que el actual aún se encuentran en revisión.

Tabla 1. Trujillo: uso actual del suelo

Abr	Descripción	Hectáreas	% del total
PN	Pasto	10693.1	37.33
CP	Cultivos permanentes	7363.0	25.71
BN	Bosque Natural	2390.5	8.35
ZP	Zona plana	1112.8	3.89
RA	Rastrojo	611.6	2.14
BP	Bosque Plantado	488.5	1.71
ZU	Zona urbana	67.2	0.23
NN	Sin información	5915.3	20.65
AC	Total área municipio	28.641.9	100.00

Fuente: Alcaldía Municipal de Trujillo (2001). Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Trujillo.

De acuerdo a la información plasmada en la tabla 1, para el 2001, el uso que acaparó el mayor número de tierras fue el correspondiente a pasto para ganadería, con un porcentaje del 37,33% de tierras utilizadas. Esta tendencia en el uso, tal como se mostrará más adelante, estuvo relacionada con el despojo de predios, proceso que tuvo lugar durante la década de los 90, a través de la práctica del testaferrato y como resultado de las acciones violentas de grupos armados ilegales.

En el panorama productivo del municipio de Trujillo, los cultivos de yuca, tomate, arracacha, frijol y los cítricos, han tenido una menor participación en comparación con el café, como se puede observar en los niveles de producción expuestos en la tabla 2. Estos datos revelan una cultura productiva en torno al café, cuya producción ha llegado a ser 10 veces mayor que la de otros productos.

Tabla 2. Municipio de Trujillo. Producción periodo 2010-2012 por toneladas (yuca, tomate, arracacha, frijol y cítricos).

Cultivo/año	2010	2011	2012
Yuca	288	288	91
Arracacha	84	84	30
Frijol	18	28	79
Críticos	80	56	224
Tomate	113	60	98
Café	4142	4142	4262

Fuente: Elaboración propia con base en, Departamento de Planeación de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca (2016). Documentos Corporativos

En cuanto al tamaño de los predios hay divergencias entre la información plasmada en el EOT de la Alcaldía Municipal de Trujillo (2001) y la contenida en el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2008) sobre Trujillo. En el primer documento se estableció que “El tamaño (...) promedio de hectáreas por zona, por familia es: para la zona oriente 0,5 ha, la zona centro 3,0 ha y en la zona occidente 4,1 ha” (Alcaldía Municipal de Trujillo, 2001, p. 10). Lo anterior evidencia que una estructura minifundista en cuanto a la tenencia de tierra en el municipio en los albores del siglo XX.

En cuanto a la CNRR, esta señala la existencia de una alta concentración en la propiedad de la tierra en el municipio. De esta manera, la Comisión establece que,

“[Con base en las tendencias sobre] estructura de propiedad en el año 1993 a partir de información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los predios entre 0 y 20 hectáreas constituyen el 83% del total (1.272) y el 82,1% de los propietarios, ocupando el 25,4% del área. A su vez, las propiedades entre 20 y 100 hectáreas participaban con el 15% (230), el 15% del número de propietarios (380) y el 40,4% del área. Los predios entre 100 y 1.000 hectáreas ocupaban el 21,6% del área (5.226,8 ha) en manos del 2,8% de propietarios (71) y el 0,1% del total de predios. Las propiedades de más de 1.000 hectáreas ocupaban el 9,1% del área (2.214,3 ha), correspondiendo al 0,1% de los predios” (2008, pp. 110-111).

Este fenómeno de concentración responde, entre varios factores. Entre algunos de ellos, se pueden evidenciar el despojo de tierras, y el embargo y remate de predios por la banca formal, ocurridos entre finales de los años 80 y mitad de los años 2000 expuestos más adelante.

En el municipio de Trujillo se ha afianzado históricamente el cultivo del café, debido a varias razones. El primer lugar esta zona fue escenario de procesos de

colonización desde mitad del siglo XIX por parte de familias antioqueñas, las cuales desarrollaron como actividad productiva principal la caficultura de ladera y montaña. (Observatorio para la sostenibilidad del patrimonio en paisajes culturales, 2010). En este contexto se consolidó un modelo de producción de café a pequeña escala (acceso de los pobladores a la mediana propiedad. El tamaño de las parcelas oscilaba entre 30 y 50 hectáreas). Así mismo, en esta zona existen de condiciones geomorfológicas y medioambientales. Este corregimiento se encuentra “(...) ubicado a una altura de 1600 m.s.n.m (...) con una temperatura promedio de 20 °C” (Instituto Mayor Campesino [IMCA], 2011, p. 7). Además, cuenta con suelos ricos en humus, condición que posibilita la producción sin grandes inversiones de capital ni de tecnología.

No obstante, el cultivo de café no ha sido la única práctica productiva de los habitantes del corregimiento. Desde la década de los 60's el cultivo de yuca, plátano y frijol, así como también la producción pecuaria a pequeña escala de ganado bovino y de especies menores como cerdos y aves de corral han sido otras de las actividades productivas desarrolladas por los habitantes de El Tabor (IMCA, 2011, p. 10).

Trujillo: el auge y crisis de la producción de café

Expertos como Bejarano (1985), Palacios (2009), entre otros señalan que el cultivo del café ha marcado el curso de la economía de Colombia, desde mediados del siglo XVIII. Factores como la alta demanda mundial del producto, la existencia de un “sistema de intervenciones” (Palacios, 2009, p. 26), los procesos de colonización antioqueña¹³ y el favorable clima institucional (creación de la Federación Nacional de Cafeteros) “confluirán, para producir efectivamente una vinculación estable de la economía colombiana a los mercados mundiales a través de la expansión cafetera” (Bejarano, 1985, p. 129), por lo menos hasta finales de los 80's¹⁴.

Es de destacar que la economía cafetera en sus inicios y hasta la década de los 50, presentó dos modalidades ¹⁵. Por un lado, en algunas zonas (como los departamentos de Santander, Cundinamarca y Tolima) se consolidó, un modelo de

¹³ Palacios (2009) al respecto señala que la consolidación de la economía cafetera dependió enormemente de la existencia de un “campesinado parcelario, en particular de los estratos que fueron surgiendo de las colonizaciones principalmente en el occidente colombiano” (p. 26).

¹⁴ Es de destacar lo que señala Bejarano (1985) al respecto: “Ya para 1920 el café colombiano propiciaba alrededor del 25% de la producción mundial de café suave y el 8% de la producción de mundial total; también hacia 1920” (p.129).

¹⁵ Palacios (2009) al respecto afirma “Si definimos hacienda de café como la unidad con más de 60000 arbustos en producción, en 1932 había en Colombia 645 haciendas, fundadas en su mayoría entre 1870 y 1995; representaban apenas 0,45% de todas las unidades cafeteras y 14% de los cafetos. Pero el papel social de la hacienda fue más significativo que su peso cuantitativo en la producción. Sin haciendas se hubiera retardado el periodo de expansión original. La hacienda cumplió una misión triple: fortaleció el diseño cafetero de las redes de comunicación hacia los otros dos pisos térmicos y buscó la salida a los puertos del mar; creó los nexos comerciales y financieros con el mercado mundial; y postulo una conciencia cafetera que sería dominante a partir de la década de 1930” (p.59).

producción de tipo hacendil. En estas zonas, debido a la crisis en las exportaciones de caucho, índigo y tabaco, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la producción de café se constituyó en una opción viable para que las clases terratenientes rurales, continuaran participando en los canales de exportación, con ello conservando su poder y un lugar privilegiado a nivel social y político (Palacios, 2009).

Este tipo de haciendas comienzan a afianzarse como importantes polos de dinamización económica, cuestión que se ve reforzada porque, por un lado, comerciantes de origen urbano se interesaron en la inversión de grandes cantidades de capital en un producto altamente demandado en el exterior; y, por otro lado, la vecindad con parcelas campesinas posibilitaron el acceso a mano de obra barata, lo que entre otras cuestiones tuvo un efecto negativo sobre la pequeña producción agrícola, la que se vio desplazada en pos de la consolidación del trabajo asalariado (Machado, 2001).

Además, es de resaltar que la consolidación de la hacienda cafetera se facilitó porque el Estado puso en marcha "un engranaje de instrumentos crediticios y comerciales muy ligados a las estructuras de parentesco, las relaciones políticas y la pertenencia o representación de intereses provinciales bien delimitados" (Machado, 2001, p. 34). Gracias a esto muchos comerciantes de procedencia urbana y sin abandonar este como su ámbito de residencia, se transformaron en caficultores y exportadores, participando activamente en los canales de comercio internacional¹⁶.

Por otra parte, se afianzó un modelo de producción de café a pequeña escala, sobre todo en las zonas situadas en la parte occidental del país. Bejarano (1985) señala que "la expansión cafetera desde 1905 descansará sobre la mediana propiedad y no esencialmente sobre la gran hacienda como había ocurrido en los 30 años del siglo XIX" (p. 129). Esta tendencia se consolidó en los departamentos de Antioquía, Caldas, Tolima y Valle del Cauca.

Uno de los factores clave para comprender la configuración de la modalidad de producción parcelaria, corresponde a los procesos de colonización antioqueña¹⁷. Tanto a través de la ocupación de baldíos como la promovida por el Estado, miles de campesinos ampliaron la frontera agrícola. Frente a esta última, el Estado mediante un prolijo desarrollo normativo¹⁸ (entre 1870 y 1930) propició por un lado

¹⁶ Es de señalar que este tipo de hacienda, al seguir la misma lógica del latifundio, se constituyó en un espacio de afianzamiento de las jerarquías. Tal como lo anota Palacios (1989), en estas se imponían sistemas de trabajo opresivos y además en relación a la "gran disparidad cultural y étnica entre los propietarios (blancos) y los jornaleros y peones (indios y mestizos) se reforzaron actitudes ideológicas racistas" (Palacios, 1989, p. 45).

¹⁷ Kalmanovitz (2009) establece que los baldíos de la nación "fueron objeto de una carrera por su apropiación durante todo el siglo XIX" (p.55), Este aspecto se constituyó en un factor determinante para la consolidación de la bimodalidad de la tenencia de la tierra, proceso en el que el naciente Estado, jugó un papel fundamental.

¹⁸ Palacios (2009) señala que "Las leyes de baldíos de la década de 1870 expresan otra ruptura parcial con la legislación colonial; ya no se estimula tanto el poblamiento organizado, nucleado y

el acceso de empresarios, terratenientes y otros a grandes extensiones de tierra; y, por otro lado, estimuló que campesinos y campesinas se establecieran en zonas de baldíos. En cuanto a la primera, el campesinado sin tierra (o con un acceso precario a este insumo), habitantes de los departamentos de Cundinamarca, Santanderes y Antioquía, víctimas de la violencia e inmersos en los conflictos agrarios migraron hacia el occidente del país (Parsons, 1997). De acuerdo con Palacios (2009) “La colonización antioqueña del occidente marca un fuerte contraste social con la colonización de la región bogotana y es un episodio decisivo en la historia contemporánea de Colombia” (p.273), pues además de que contribuyó a la expansión del café hacia otros departamentos; posibilitó el acceso de miles de campesina a la propiedad de la tierra.

Parsons (1997) y Palacios (2009) señalan que, al comienzo del proceso de ocupación de las zonas de ladera de las cordilleras¹⁹, no fue el café el que se privilegió como actividad productiva, sino los cultivos de subsistencia tales como el maíz, la yuca y el plátano. En este sentido la ocupación de los baldíos del departamento del Quindío o la parte norte montañosa del departamento del Valle del Cauca “ofreció oportunidades de sobrevivir a la población antioqueña que por entonces crecía más rápido que cualquier otro lugar de la República” (Palacios, p. 273). Si bien tal ocupación dio lugar a una estructura de tenencia de la tierra de carácter minfundista, Palacios (2009) reconoce que los labriegos debieron enfrentar problemas tales como “la inseguridad en la titulación jurídica para miles de colonos pobres” (p. 276), aspecto que contribuyó a que la masa de labriegos quedarán a “merced de gamonales y fonderos”²⁰ (Palacios, 2009, p. 276).

A la zona de estudio (municipio de Trujillo, norte del Valle) arribaron, en su mayoría colonos pobres, es decir campesinos “expulsados por la presión demográfica” (Palacios, 2009, p. 278). Estos se caracterizaron por hacer parte de “núcleos familiares que obtienen sus ingresos básicos de subsistencia trabajando independientemente en su propia parcela y con instrumentos de su propiedad, parcela que explotan con su propio trabajo sin recurrir a emplear jornaleros o a emplearse permanentemente en otras fincas” (Palacios, 2009, p. 278).

Podemos destacar varias condiciones que, amarradas a la colonización antioqueña, posibilitaron la consolidación del cultivo y comercio del café en el norte del Valle. 1. La existencia de condiciones geomorfológicas y medioambientales. Alturas entre 1200 y 2000 msnm, temperaturas promedio de 20 °C, suelos ricos en humus, entre

conforme a jerarquías políticas y administrativas reconocidas inmediatamente por el Estado, sino que, por el contrario, se auspicia la ocupación individual” (p. 269).

¹⁹ La colonización antioqueña no solo corresponde a un proceso de ocupación de las zonas de montaña de la frontera agrícola, también corresponde a procesos de colonización de los valles de los ríos e interandinos, en los que, a diferencia de la ocupación de las montañas, si se dieron procesos de latifundización.

²⁰ Propietario o administrador de una fonda.

otras; 2. La disponibilidad de tierra y mano de obra familiar²¹; 3. El desarrollo de una infraestructura estatal y privada que ha asegurado la compra del grano; 4. La cultura productiva cafetera que encarnaron los migrantes. Paralelo a lo anterior es de considerar el hecho de que el cultivo de café no demandara grandes inversiones de capital ni de tecnología. Además, al ser un producto durable y de fácil procesamiento, se consolidó como la mejor opción productiva para campesinos y campesinas²².

La colonización referida implicó la creación de núcleos poblacionales. Uno de estos corresponde al municipio de Trujillo. Este fue fundado en 1922 en la vertiente oriental de la cordillera occidental. La expansión y consolidación del café en esta zona trajo consigo el desarrollo paralelo (relacionado con el café) de infraestructura vial, de centros de acopio y procesamiento del grano, presencia institucional (FNC), inversión social, entre otros. Con respecto al desarrollo vial, este no solamente sirvió para la comercialización del café, sino también para “ingreso a la región de los insumos necesarios en el proceso productivo, tanto del café como de la caña, así como para la movilización de la fuerza trabajo” (CNMH, 2014, p. 59)²³.

Al igual que en el resto de municipios caficultores del departamento del Valle, entre la década de los treinta y la de los cincuenta, la producción del grano se incrementó de tal manera que, como afirma la CNMH (2014), “llegó a constituirse en el mayor producto agrícola del departamento por encima de la caña”(p. 60). Esta actividad económica dinamizó sectores también concernientes con la producción agrícola y con el desarrollo mercantil. Incluso, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014) reconoce que “el café se constituyó en uno de los sectores líder del desarrollo económico regional” (p. 62 citando a CIDSE, 1989-1990).

Adicionalmente, es de destacar que con la creación del Fondo Nacional del Café en 1940²⁴, además de que se apostó por el mejoramiento de los indicadores sociales de las zonas cafeteras, también, de acuerdo con Morales (2007a), “(...) se han financiado también los programas de investigación, extensión, promoción [y] crédito

²¹ Palacios (2009) señala al respecto “Finalmente, el bienestar de la familia, que se define por el equilibrio entre la producción y el consumo, depende del ciclo biológico familiar, es decir por la edad del grupo” (p. 68).

²² Al respecto Palacios (2009,) plantea “En el caso del café es patente que sus características de cultivo de ladera no mecanizable, altamente estacional y muy intensivo en mano de obra, favorecieron la vía campesina” (p. 468).

²³ Al respecto el CNMH (2014) señala “La infraestructura vial permitió una integración en doble vía: a nivel intra regional de algunas zonas del departamento, principalmente del centro y el norte del valle y de estas sub regiones con el resto del país, a través del eje vial sur - norte, uniéndolos con la vía Panamericana apostada en las márgenes derecha e izquierda del río Cauca, comunicando a su vez estas zonas del Valle con los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia” (p. 58).

²⁴ A partir de diciembre de 1940 mediante contrato con el Gobierno de Colombia, la Federación empezó a administrar el Fondo Nacional del Café, una cuenta de recursos parafiscales, encargado el Fondo se encargó de comprar el café a los agricultores. Es decir, la FNC, a través de la administración del Fondo, asegura la compra del café producido por los colombianos en todos los municipios cafeteros del país. De igual manera, como lo establece Morales (2007a) “Con recursos del Fondo se crearon importantes empresas como la Flota Mercante Grancolombiana, el Banco Cafetero y las Compañías Agrícolas de Seguros” (p.168).

(...)” (p.168). A través de la recaudación “procedente de gravámenes a la exportación de café” (Organización Internacional del Café [OIC], 1983, p. 28) el FNC tuvo, hasta comienzos de los 90, a su disposición los recursos suficientes para incentivar la productividad vía crediticia. Como modalidad para facilitar el acceso a créditos, de acuerdo a una política de estabilización monetaria, se utilizó el subsidio a las tasas de interés. Dicho acceso a créditos financieros se fortaleció a partir de la constitución en 1953 del Banco Cafetero, el cual llegó a ser uno de los bancos más importantes del país, con 295 oficinas a lo largo del territorio nacional (Morales, 2007b) y cuya finalidad era “financiar la producción, la recolección de la cosecha, el transporte [y] la exportación [del grano]” (Morales, 2007b, p.502).

Sin embargo, el campesinado cafetero no era “un granjero prospero bien integrado al mercado” (Palacios, 2009, p 72). La baja productividad jugaba en contra de la rentabilidad del cultivo. Las familias campesinas con acceso a pequeñas o medianas propiedades no lograban compensar las inversiones (capital, mano de obra) con el precio recibido. La FNC consideró que la baja productividad se podía resolver a través de la transferencia de semillas mejoradas²⁵, el acceso subsidiado a insumos químicos para la producción y a crédito. Las referenciadas se constituyeron en estrategias claves de la “Revolución Verde”, programa que conllevó un giro productivo en la zona (al igual que en el resto de zonas del país dedicadas a la caficultura”.

La apuesta por el incremento de la productividad nacional estuvo relacionada con la activa participación que Colombia tuvo en el Acuerdo Internacional del Café establecido en 1962. El país anualmente debía cumplir con una cuota específica, a la que se pretendía llegar a través del fomento de la productividad. De acuerdo con Palacios (2009) “Para maximizar sus ingresos cafeteros, los países productores deberían restringir la producción, aumentar la productividad y diversificar la agricultura en las zonas cafeteras” (p. 501). De acuerdo con esto la FNC “(...) creó un fondo especial que se constituyó en la base más importante de financiación de los programas de desarrollo y diversificación” (Palacios, 2009, p. 501).

La necesidad de incrementar la productividad, conllevó a que las unidades económicas campesinas cambiaran prácticas diversificadas de producción por el monocultivo del café. A través de la “(...) introducción de semillas de café mejoradas, la intensificación en el uso del suelo y la transformación del paquete tecnológico” (CNMH, 2014, p. 63), así como de posibilitar el acceso a crédito a bajo costo por parte del campesinado “(...) cuando se trataba de cultivos temporales o de rápido rendimiento” (CNMH, 2014, p.65)²⁶ se logró que los campesinos

²⁵ La CNMH (2014) señala “Una de las principales expresiones de este cambio fue la introducción de la variedad caturra, la cual no requería de sombrero, derivando a su vez en la eliminación de productos complementarios a la dieta alimentaria y la economía campesina. El fortalecimiento del monocultivo fue entonces parte de la solución para incrementar el ingreso y el rendimiento de la economía cafetera” (p. 65).

²⁶ De esta forma se pasó de 104.674 hectáreas de café, con una producción de 73.272 toneladas por hectárea y un rendimiento de 0.70 [tonelada por hectárea] a principio de los años 70, a 137.500 hectáreas de café, con una producción en toneladas por hectárea de 103.000 y un 0.75 tonelada por hectárea como rendimiento en 1979. (CNMH, 2014, P. 67).

cambiasen sus dinámicas productivas tradicionales. Al respecto, Palacios (1983) señala que “El modelo gubernamental implicaba la transformación de las lógicas productivas y de los parámetros organizacionales de la antigua finca campesina, de tal suerte que el productor transformara sus unidades de producción en unidades empresariales” (p. 470).

Palacios () considera que el problema era que el incremento de la productividad, aspecto que no solo dependía de la incorporación de innovaciones tecnológicas en sus prácticas productivas o el acceso a crédito, implicaba una mayor inversión de mano de obra familiar. Este aspecto conllevó la autoexplotación de la familia; además, en la medida en que el campesinado “trabaja[ba] hasta el punto de satisfacer las necesidades de consumo doméstico” (Palacios....), no contaba con la capacidad para enfrentar los desbalances resultado del giro productivo. El “salario sombra”, es decir aquel que no se incorpora en los costos de producción resultaba no compensar las pérdidas frente a los pagos recibidos. Al respecto, la CNMH (2014) considera que “En un contexto más amplio se observa que la dinámica demográfica debilita la economía de las fincas familiares; una parte de sus miembros conforma el fondo de reserva laboral, en un producto muy intensivo de mano de obra” (p. 71). En este sentido el aumento del ingreso se operó a través de la intensificación de la explotación campesina.

Con respecto al acceso a crédito, como señala CNMH (2014, citando a Taussig, 1978), si bien esto conllevó a un aumento de la productividad, debe considerarse a su vez como un factor negativo. En este sentido el incremento de la demanda de capital vía crédito por parte de las familias campesinas trajo consigo la reducción de los ingresos, aspecto que empeoró la situación económica de estas familias, junto con “un enorme aumento del endeudamiento y dependencia del mercado de capitales” (Taussig, 1978, pp. 39-40, citado por CNMH, 2014, p. 66) por parte de las mismas.

Otro aspecto a considerar es que, a pesar de la transferencia de tecnología y el acceso a los insumos de producción, la productividad no pudo sostenerse en la zona debido a la entrada de plagas como la roya y la broca²⁷; y al deterioro de los suelos. Estas condiciones afectaron los cultivos generando pérdidas y decrecimiento en los ingresos percibidos por las familias campesinas tal como señala uno de los entrevistados por el proyecto:

“(...) en el año de 1958, en ese tiempo eran más productivas estas tierras, las cosechas eran más abundantes y sin necesidad de aplicarles ningún mineral o abono eran más abundantes las cosechas. Lo que sí es que las tierras era con azadón que se echaba, pero así estaban más completas, ahora se han acabado entonces la producción también ha bajado” (Trujillo, Agosto de 2016).

²⁷ Frente a la entrada y expansión de las Plagas, Rincón (2006) señala que “Desde finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta la economía cafetera comienza a ser golpeada por la roya. Considerada como una de las peores plagas que afecta los cafetales, puso en evidencia la fragilidad de la economía colombiana, altamente dependiente de dicho sector” (p.90).

“A mí lo que me han comentado es que, a finales del 70, lo que le he escuchado a mi papá es que como en el 70, más después del 72, es que entraron las plagas. Cuando comenzaron a llegar los abonos y los fumigadores, porque antes ni fumigadoras habían. En ese tiempo comenzaron y póngale usted que a los cinco o un poquito más de eso se dispararon las pestes como la broca, la roya y ahora han salido otras” (Trujillo, Agosto de 2016).

La entrada y expansión de estas plagas requirió que la FNC, en conjunto con Centro Nacional de Investigaciones del Café -Cenicafé-²⁸, desarrollara como solución al problema, una variedad de café resistente: la variedad Colombia. Si bien con su uso los campesinos podían incrementar los niveles de productividad, su adopción implicaba una reorientación de las prácticas productivas. Esta reorientación, en primer lugar, implicó la sustitución de variedades tradicionales; en segundo lugar, la nueva variedad “para una producción óptima, (...) no requiere de sombríos” (Rincón, 2005, p. 90); en tercer lugar, demandaba un mayor uso de insumos y abonos; cuarto, para que la producción fuese sostenible se requería de un periodo muerto de 4 años, aspecto que implicaba reducir los ingresos pero no los gastos, tal como lo sugiere Rincón (2005). Así “la sustitución de variedades hace parte igualmente de un proceso de tecnificación y mejoramiento de la producción propio de los paquetes de revolución verde, en procura de ampliar no solo la cantidad producida, sino el área sembrada y la densidad de árboles por hectárea” (Rincón, 2005, p. 90).

La crisis de la productividad referida y el endeudamiento trajeron como consecuencia en Trujillo, el embargo de los predios por parte de los bancos, lo que permitió que terratenientes adquirieran a bajo costo las fincas de pequeños productores. Además, los campesinos se vieron forzados a vender o a arrendar para cubrir sus crecientes deudas. De esta forma, las pequeñas fincas dejan de ser trabajadas por las familias campesinas o son anexadas a las grandes propiedades, perdiendo la autonomía sobre la producción y el control sobre el ingreso derivado de esta. Este aspecto fue corroborado por uno de los entrevistados:

“Las deudas, las plagas todo lo que vino después hizo que la gente acá perdiera sus tierras. Porque las ponían de prenda y es que no lograban llegar a reunir las cuotas y se sumaban hasta sumar una deuda grande. Entonces perdían las fincas y ahí llegaba la gente con plata y las compraba bien baratas. Varias de esas tierras las tiene Smurfit²⁹” (Trujillo, agosto de 2016).

La pérdida de la tierra se sitúa como una de las causas de la migración rural – urbana y de la proletarización del campesinado. La CNMH (2014, citando a

²⁸ Creado en 1938, este centro ha desarrollado las siguientes labores: la generación de tecnologías que permitan una mayor productividad cafetera, el mejoramiento de semillas mediante la creación de variedades de café, haciéndolas resistentes a plagas como la broca y la roya, el desarrollo de prácticas agrícolas que tiendan a la sostenibilidad social, ambiental y económica, y la capacitación de los caficultores en cuanto a la utilización apropiada de insumos y tecnología para la producción del café.

²⁹ Sobre este aspecto volveremos más adelante.

Taussing) observa que en este contexto de crisis del café un número creciente de personas ingresa a la fuerza de trabajo de las plantaciones y fincas grandes. El aspecto mencionado implicó la recomposición de la estructura de la tenencia de la tierra. Esta misma fuente indica que “La pequeña propiedad, entendida como aquellas explotaciones menores a 20 hectáreas, perdió terreno en área, al bajar de 17,42% de la tenencia al 11,31%. La mediana explotación, comprendida entre las 20 y las 500 hectáreas, perdió dos puntos, en tanto que la gran propiedad, mayor a 500 (has), aumentó su participación en área, al pasar del 24,62% en 1960 al 33,67% en 1977.” (CNMH, 2014, p.73).

El siguiente fragmento de una de las entrevistas realizadas en la zona resume la envergadura y complejidad de las situaciones descritas:

“Ya el Comité y la Cooperativa fueron entrando y diciendo que sembráramos variedad Caturro, también nos fueron haciendo créditos. Cuando eso, el primer crédito que yo hice fue de 40 mil pesos, para sembrar una hectárea. Entonces sembré la primera hectárea y eso fue muy bueno, una belleza, y fuimos sembrando y sembrando hasta que cambié el café Nacional por el Caturro. Ya después era que el Caturro le daba la Roya, entonces a voltearlo otra vez de variedad. Entonces tumbaron todo el Caturro y pérdida total. Cuando sembrábamos el Caturro nos daban un incentivo para que sembráramos y sembrábamos. (El Tabor, 12 de enero de 2017).

Es de considerar que tanto la recomposición de la productividad (vía crediticia y de transferencia tecnológica) se sucedió en el escenario del establecimiento del Acuerdo Internacional del Café (1969). Este acuerdo tuvo como objetivo el estabilizar el precio de este producto en el mercado internacional. Mediante el establecimiento de cuotas de exportación para cada uno de los países productores, se apuntaba a regular la oferta del grano en los mercados mundiales.

El rompimiento del Pacto conllevó a una caída en los precios del grano de café de un 40% entre 1989 y 1992, “pues el cambio de régimen impulsó la liberalización de los inventarios retenidos en los países productores y entonces se registró un exceso de oferta del grano.” (Pérez, 2007, p. 117). En este marco las zonas cafeteras del país enfrentaron procesos de empobrecimiento, muchos abandonaron la producción de café, otros transitaron hacia el trabajo asalariado y migraron hacia las zonas urbanas (Oxfam, 2002, p. 11), por lo cual. la caída de este acuerdo significó un impacto negativo para el pequeño productor.

En este sentido la crisis productiva de los 70 (presencia de plagas) se agudizó a finales de los 80's e inicios de los 90's con el rompimiento del Acuerdo Internacional del Café. Así, el aumento de los costos de producción para el campesino, junto con la caída del precio internacional del café. Aunado significó un desequilibrio entre la inversión en torno a los insumos y la ganancia obtenida de la producción. Evidencia de esto es que para 1991, se registró un cambio en el porcentaje de ingreso que recibían los productores de café frente al precio dado para el consumidor final; mientras en 1989 los productores recibían el “40% del precio dado al consumidor

final, para 1991, solo llegaron a recibir menos del 15% sobre este precio” (Lombo, 2013, p. 32).

Como resultado del desplome de los precios, la FNC redujo sus líneas de crédito, (suspendiéndolas en 1991) para disminuir los niveles de producción e impedir que los precios internos cayeran. De igual manera se implementó un programa para la quema de 70.000 hectáreas de cafetales para reducir el exceso de oferta del grano y poder dar estabilidad al precio del mismo. (Cuéllar, 2004).

Estos procesos impactaron en la estructura de distribución de la superficie de tierra para la siembra del café en el país: el área cafetera en 1970 era de 1,051,443 hectáreas y en el periodo comprendido de 1993 a 1997 fue de 869,157 (García, 2003)³⁰. Sin embargo, el número de productores aumentó de 303.000 a 566.000 en los mismos periodos, por lo que el tamaño promedio de la unidad de producción cafetera se redujo de 3.5 hectáreas en 1970 a 1.3 hectáreas entre 1993 y 1997 (García, 2003).

De acuerdo con Rincón (2005) la ruptura del Acuerdo y la variación de los precios internacionales conllevaron a la reorientación de las “políticas productivas agenciadas por la dirigencia gremial de la FNC” (p. 17). Los ajustes de la institucionalidad cafetera conllevaron a “un abandono de una cadena de responsabilidades adquiridas a lo largo de su historia en las que los productores del grano cambiaron sus prácticas de cultivo, recibiendo una orientación en cuanto a las formas de producir, las técnicas empleadas y los sistemas de comercialización” (Rincón, 2005, p. 19).

En este escenario la FNC promovió el uso de nuevas variedades híbridas de semillas, así como también un modelo productivo de gran volumen y no de alta calidad. Bajo esta lógica el campesino reorientó la producción de café, adquiriendo créditos con la banca formal, para obtener las semillas híbridas. No obstante, estas no generaron el resultado esperado, ocasionando pérdidas económicas e insolvencia de pago de los créditos que habían obtenido con la banca formal. En un aparte de las entrevistas se hace mención a lo anterior:

“En ese entonces sale el Comité de Cafeteros, junto con la Federación, con el cuento de que se quebraron, y comenzaron a sacar unos híbridos del café y otras variedades y, entonces, el campesino retoma... como le escriben a los que saben que presuntamente son ellos, entonces tumban sus cosechas y re-siembran otros cafés y no les da resultado, eso los lleva a la quiebra y llega la Banca y toma posición de esos territorios y después los remata a cualquier precio y en muchos de esos remates Cartón Colombia aprovechaba y compraba o el terrateniente de turno, que también alimentaba a los narcotraficantes, compraba esas tierras”. (Trujillo, 11 de agosto de 2016)

³⁰ Los datos fueron tomados por García (2003) de la Encuesta Cafetera realizada por Federación Nacional de Cafeteros en 1970 y del Sistema de Información Cafetera -SICA- de la FNC, 1993-97.

De acuerdo con la CNMH (2014) en el marco del acuerdo, Trujillo se consolidó desde 1976 y hasta la caída del acuerdo como un importante epicentro cafetero de la cordillera Occidental. Si bien, tal como se estableció en los apartes de las entrevistas expuestos, la roya y la broca deterioraron la productividad y sumieron en la crisis al campesinado caficultor de la zona, las acciones de la FNC (transferencia de tecnológica y créditos) contribuyeron al incremento de la productividad y a la generación de empleo. Esta misma fuente registra como a mediados de la década de los 80's, Trujillo se constituyó en el tercer municipio con mayor contribución al empleo agrícola y cafetero tal como se expone en la Tabla 3:

Tabla 3 Valle del Cauca: empleo agrícola total y cafetero por municipio (1985)

Municipio	Café	Total Agrícola	Resto Agrícola	Total Ocupados	% café/ Total agrícola	% café/ Total ocupados
Sevilla	5.966	6.539	573	19.709	91.2	30.3
El Águila	3.386	3.873	487	4.096	87.4	82.7
Trujillo	3.361	3.660	299	5.802	91.8	57.9
Ansermanuevo	3.177	3.907	730	4.676	81.3	67.9
Riofrío	2.106	2.745	638	4.913	76.7	42.9
El Cairo	1.897	2.370	473	3.609	80.0	52.6
Argelia	1.803	2.022	219	2.899	89.1	62.2
Toro	921	1.327	406	4.159	69.4	22.2
Bolívar	871	1.497	626	3.473	58.2	25.1
Roldadillo	742	2.197	1.455	8.910	33.8	8.3
El Dovio	762	1.027	265	4.142	47.2	18.4
Versalles	1.46	1.371	325	2.834	76.3	36.9
Total Depto.	49.796	90.466	40.670	929.437	55.0	5.4

Fuente: CNMH (2014)

Sin embargo, para finales de los años ochenta la caída del Pacto deviene en una crisis del sector en el municipio. Si la entrada de la roya y la broca a la zona conllevó pérdidas en la productividad, con la ruptura del Pacto se presentó un considerable descenso de la producción y por ende una baja en los índices del empleo cafetero. El CNMH (2014 citando el informe de labores del Comité Departamental de Cafeteros del Valle, 1994) señala que entre 1990 y 1993³¹ la crisis en municipios caficultores como Trujillo, se caracterizó por lo siguiente:

- Deterioro de los niveles de vida de las familias caficultoras.
- Baja en la productividad de las fincas y en la calidad del producto
- Deterioro de los ingresos y abaratamiento de la mano de obra.

³¹ En el 94 se dio una recomposición de los precios internacionales.

- Incremento de la tasa de migración rural-urbana

Además, el debilitamiento institucional que debió enfrentar la FNC implicó que el campesinado caficultor no contara con “el conjunto de servicios que la entidad prestaba a la población cafetera. [En este contexto] [s]e redujo la prestación de asistencia técnica y la cofinanciación de obras de equipamiento colectivo e infraestructura en los municipios cafeteros” (CNMH, 2014, p. 80). Este aspecto es corroborado por algunos apartes de las entrevistas realizadas en campo:

“Cuando se vino la crisis, que fue una crisis muy pesada para el sector cafetero, la mayor parte el Fondo Nacional del café empezó a quedarse sin recursos. Entonces el Comité comenzó a desligarse de todo ese tema de responsabilidades” (Trujillo, septiembre de 2016).

“Es que la gente era muy dependiente del Comité. Claro, la Federación por mantener un sector, intervenir el sector para que fuera rentable, acostumbró al campesino al subsidio. Cuando se caen los subsidios, pues la producción no se mantiene porque los costos eran bajos por las ayudas del Comité. Ustedes saben, el mantener precios de sustentación, el que cuenten los campesinos con extensión y asesorías (...) todo eso cambió y entonces la crisis afectó a un sector protegido” (Bugá, agosto de 2016).

Con la liberalización del mercado y la reorientación de la política cafetera el acceso al crédito se vio afectado, aspecto que impactó considerablemente a los caficultores de Trujillo. Durante la década de los 80, dado el panorama de estabilidad económica dentro del mercado cafetero, la FNC alentó a los pequeños caficultores a obtener créditos para la renovación de cafetales y la tecnificación de procesos productivos dentro de las fincas. Esta iniciativa de la Federación llevó a que en 1996 el “(...) 90% de pequeños campesinos, que habían] entrado en la ola de tecnificación, estuvieran] endeudados con el Banco Cafetero (BANCAFE) y la Caja Agraria (CREDITARIO)” (Rodríguez, 1996, p. 8). Al respecto, Rincón (2005) señala acertadamente:

“(...) la demanda de capital para el establecimiento del cultivo, el sostenimiento de la plantación, el proceso de recolección y procesamiento, así como la posterior adecuación tecnológica de la producción y su amoldamiento a los requerimientos y condiciones del mercado internacional, propician un proceso de endeudamiento crónico, en el cual los mayores perjudicados son aquellos que no disponen ni de condiciones de capital, ni de soportes sociales y políticos ligados al gremio cafetero y otros renglones de la producción” (p. 84).

En el caso de Trujillo, los ingresos de las familias cafeteras no podían soportar la carga crediticia que habían adquirido en los años anteriores, aspecto relacionado con una nueva oleada de pérdida de tierras. Muchos de los campesinos de la zona pusieron sus predios como garantía de la deuda. Como consecuencia “muchos medianos y pequeños cultivadores fueron obligados a vender sus fincas a menos precio para pagar sus deudas. Otros, simplemente, fueron sacados del negocio, porque las entidades financieras les embargaron sus propiedades” (Ramírez, 2008,

p. 116). Sobre este aspecto, un miembro de la comunidad hizo énfasis de la siguiente manera:

“Con la crisis del café llegó la Banca y despojó a la gente de sus tierras. Actúan como los paramilitares, pero ellos no son armados y utilizan un argumento muy sólido para que la gente se endeude y pierda sus tierras. Después Cartón Colombia compró tierra a muy bajo costo, eso les facilitaba a ellos las cosas para comprar tierra a bajo costo” (Trujillo, agosto de 2016).

A mediados de la década de los 90 la FNC buscó paliar la crisis con la refinanciación de deudas³². Sin embargo, debido a este proceso, los intereses alcanzaron a estar al 40% anual para 1996, lo cual conllevó al exacerbamiento de la crisis en el municipio, como lo expone la CNMH (2014). Así mismo, en Trujillo como en la mayoría de los municipios caficultores en Colombia se precarizó la vida de los caficultores como consecuencia del congelamiento de los créditos, las deudas contraídas y la frágil situación del mercado cafetero. Por ello, a finales de la década de los 90, el café supuso para los habitantes de la zona un cultivo de baja rentabilidad.

Paralelo a lo señalado, tanto la pérdida de tierras como la crisis del café contribuyeron a configurar el escenario propicio para la entrada de empresas privadas como Smurfit Kappa Cartón de Colombia a la zona. Al respecto el CNMH (2014) señala que “En el período de crisis cafetera de los años noventa se vino a fortalecer el monocultivo del pino en las zonas medias de las cordilleras central y occidental” (p.87), por lo cual, este cultivo comenzó a posicionarse en Trujillo como una alternativa al café. También otros ámbitos productivos fueron fortalecidos (tal como veremos más adelante) por organizaciones eclesiósticas y no gubernamentales, actores que apuntaban a recomponer la estructura productiva impactada por la crisis del café³³.

Las reorientaciones de la política cafetera, la entrada del capital privado (Smurfit) en un contexto de construcción alternativas económicas por parte de actores no gubernamentales, han conllevado a un acelerado proceso de recomposición de los patrones productivos en la zona, proceso que además fue acelerado o desacelerado con el escalonamiento de la guerra.

La crisis cafetera en relación al quiebre del Pacto y también a los impactos negativos que tuvo la implementación de innovaciones tecnológicas y el encarecimiento de los

³² Por ello en enero de 1995 el Fondo Nacional del Café aportó 49 mil millones de pesos para aliviar las deudas de los campesinos, de los cuales 27 mil millones iban dirigidos a los más pobres (Cuéllar, 2004). Así mismo, a través de la Ley 223 de diciembre de 1995, se destinaron 141.333 millones de pesos hasta 1998 para el alivio de las deudas contraídas por los caficultores frente a entidades bancarias. Dichos recursos fueron obtenidos de la recaudación del I.V.A, de transferencias de Comités Departamentales y del Plan de obras del Fondo de Desarrollo Rural -DRI- (Cuéllar, 2004).

³³ Según el CNMH (2014) “Para el año 2008 se estimaba que tenían sembradas en este municipio cerca de 1000 hectáreas, proyectándose la siembra de entre 5000 y 6000 para los años siguientes” (pp. 91-92).

créditos, deben ser entendidos como síntomas de la neoliberalización del sector. En este sentido “En el marco del proceso de apertura económica y de la globalización impulsada a través del neoliberalismo, factores nacionales e internacionales de carácter coyuntural e histórico se entrecruzan de manera simultánea para generar condiciones sociales, políticas, económicas” (Rincón, 2005, p. 83). en los que se ancla la exclusión de los pequeños productores de todos los renglones de la economía.

Institucionalidad, organizaciones y economía campesina

El municipio de Trujillo fue escenario de una marcada violencia bipartidista desde la década de los 40's hasta la década de los 60's. En este contexto el Partido Conservador dominó políticamente el territorio (Atehortúa, 1995, citado por CNRR, 2008). Lo anterior, dio como resultado la consolidación de un poder “(...) gamonalicio³⁴ de los jefes conservadores” (CNRR, 2008, p.92). Estos jefes controlaban las reglas del juego electoral, repartiendo los cargos públicos entre los terratenientes de la región. En una de las entrevistas, al respecto se menciona lo siguiente:

“Los gamonales, en esa época, manipulaban el territorio, (...) entonces ellos quitaban y ponían alcaldes y lo hacían aquí en Trujillo, alimentaban a la gente para que se fueran, entonces eran grupos políticos que no se comprometían con la gente y hacían campañas a punta de bala y aquí era la ley del más fuerte con un revolver en la cintura” (Trujillo, agosto de 2016).

El establecimiento del poder gamonal en el municipio se puede rastrear desde el proceso de la colonización antioqueña. Al respecto, Palacios (2009) establece que existe una estrecha relación entre la configuración estatal y los procesos de colonización antioqueña de las zonas de ladera del departamento del Valle del Cauca. El autor observa que sí bien esta colonización apuntaba a resolver el problema de acceso a tierra de una masa importante de campesinos, está lejos de ser un proceso democrático como algunos autores han querido verlo. A zonas como Trujillo no solo migraron labriegos con necesidades de tierra, sino también sujetos con poder político que buscaron enriquecerse con la explotación maderera y aurífera. Estos fueron consolidando poderes y con el tiempo se constituirían en los gamonales de las zonas. Miles de colonos pobres quedaron “a merced de estos “en una atmósfera de incertidumbre, propicia para generar aquellas formas tan sistemáticas de criminalidad asociadas a problemas de tierra y trabajo” (Palacios, 2009, p. 276).

³⁴ Hace referencia a la figura de los gamonales. Siguiendo a Sánchez (1977), corresponde con este rotulo hombres y mujeres (en su mayoría hombres) que se hicieron a más tierras y con ello fortalecieron además de su poder económico su capital político. Además del campesinado que estaba en sus tierras como jornaleros y jornaleras, peones y peonas, arrendatarios y arrendatarias, también la gente rural con acceso limitado a la tierra y colonos, se constituyeron en capital votante, es decir en la masa que en el marco de una democracia representativa sostendría el poder de estos o de sus aliados en el plano político, a través del derecho al voto.

Tal como se dijo antes, en Trujillo quienes se constituyeron en los actores del poder gamonalicio fueron los conservadores. Estos a través del uso de la violencia directa e indirecta (cooptación del aparato político) “reconfigurar[on] relaciones de propiedad de la tierra, implicando además cambios en las prácticas políticas de la población de esos municipios (especialmente peones, apareceros y arrendatarios)” (CNMH, 2014, p. 206). Así, los campesinos “engrosa[ron] la base electoral de dichos hacendados y terratenientes, manteniéndolos en el poder hasta la década del setenta” (Atehortúa, 1995, citado por CNMH, 2009, p. 205).

La serie de entrevistas realizadas en la zona evidencian que el campesinado ubica como referente institucional (relativo a lo productivo) a la Federación, en concreto al Comité municipal de Cafeteros; y a instancias no gubernamentales como el Instituto Mayor Campesino y la Iglesia Católica. Al indagar por el papel del estado local en los procesos productivos, lo común fue que las personas no reconocieran ni a la alcaldía, ni a la gobernación como entes fundamentales para el desarrollo de la economía campesina. Este desconocimiento tiene que ver con la manera como se ha configurado lo gubernamental en la zona, que tal como se explicó en párrafos anteriores fue producto de la violencia y la cooptación política.

La falta de apoyo a nivel institucional formal, generó vacíos que fueron ocupados por una institucionalidad no estatal, cómo la Federación Nacional de Cafeteros³⁵. Esta orientó y reguló las prácticas del pequeño productor³⁶; además, no solo contribuyó a la dinamización de la producción de cafés sino también jugó un importante papel en el desarrollo de infraestructura y de acceso a servicios sociales como vivienda, alcantarillado, educación y salud.

Tal como se explicitó para el caso de Yacuanquer tanto, la consolidación de la economía campesina (como un modo de producción económico), como el mantenimiento del equilibrio entre producción y consumo de estas unidades, en parte es el resultado de la existencia de una serie de condiciones: acceso a insumos subsidiados, a créditos, a tierra, mano de obra, precios de sustentación; además de la existencia de una infraestructura institucional que soporta la economía campesina. En Trujillo, a diferencia de Yacuanquer, fue la Federación Nacional de Cafeteros la instancia que posibilitó lo anterior.

Una sola institución cumplió múltiples papeles que, en zonas como Yacuanquer, ejecutaron por ejemplo el ICA, el IDEMA, la Caja Agraria. Fue esta instancia la que

³⁵ La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) fue creada en 1927. Esta nace como una entidad privada que realiza funciones estatales. De acuerdo con Palacios (2009) esta institución ha jugado un papel esencial en la definición de las políticas cafeteras y en “redistribución del ingreso cafetero” (p. 437).

³⁶ El surgimiento de la FNC, respondió, siguiendo a Machado (2001), al establecimiento de la industria cafetera y a la expansión precapitalista de la economía, entre 1880 y 1930. Así, alrededor de la caficultura “(...) se generó en el país, y en particular, en el sector agropecuario uno de los desarrollos institucionales de mayor impacto en las regiones cafeteras, alrededor de la Federación Nacional de Cafeteros y el conjunto de organizaciones de prestación de servicios a la industria cafetera que se dejaron sentir en todos los rincones y veredas cafeteras” (Machado, 2001, p. 78)

posibilitó hasta finales de la década de los 80's el sostenimiento de precios (por la participación de Colombia en el Acuerdo Internacional del Café); aseguró la compra del producto (canales de comercialización); llevo a cabo procesos de transferencia de tecnología (Semillas mejoradas, técnicas de producción, innovación tecnológica) y facilitó el acceso a créditos subsidiados y a mecanismos de refinanciación de las deudas. Además, en las zonas cafeteras, construyó obras de infraestructura pública, incidió en la educación rural, entre otros³⁷. Uno de nuestros entrevistados refiere al respecto:

“Acá la instancia que representaba al Estado fue el Comité de Cafeteros. Fue muy importante, sigue siendo muy importante. La presencia fuerte era del Comité. En otras zonas uno veía la presencia fuerte del IDEMA, pero acá solo hacía presencia con un granero” (Trujillo, septiembre 2016).

“Cuando uno mira la historia de la dinámica, hasta finales de los 90 los comités de cafeteros a nivel nacional eran los referentes para cualquier tema de desarrollo. Entonces los comités, la comunidad llegaba aquí y decía, necesitamos apoyo para la construcción de una escuela, alcantarillados, acueductos, electrificación y el Comité cubría todo ese tipo de necesidades” (Trujillo, septiembre de 2016).

En el municipio de Trujillo, según entrevistados, esta institución en épocas de bonanza alcanzó a comprar el 70% de la producción de café, además que fomentó el acceso a crédito y a procesos de extensión. Pero además, y tal como se sugirió antes, los entrevistados reconocen que la Federación (incluso durante la crisis y en la actualidad) ha realizado acciones como la construcción de escuelas, carreteras y puestos de salud, entre otros bienes físicos. Sí bien esta ha sido una constante, el desarrollo de estas acciones se debilitó con la caída del acuerdo y las crisis subsiguientes. Perfetti, Velásquez, Ortiz, Hernández y Arango (2001) sostienen que los Comités Departamentales de la Federación Nacional de Cafeteros, “en el segundo quinquenio de los noventa, disminuyeron la inversión (a precios constantes) en educación y salud, e infraestructura, y sólo aumentaron la destinada a asistencia técnica y diversificación” (p.9).

Sí bien el papel de esta institución ha sido significativamente importante para el desarrollo cafetero, también ha sido afectado por las crisis, a las que además ha contribuido. Primero, porque las acciones de carácter proteccionista (sustentación de precios) no contemplaron estrategias para sortear las crisis. Segundo, porque dada su relación con el mercado internacional buscó el incremento de la productividad a costa del cambio productivo de los agricultores, cambio que conllevó a que la productividad no fuese sostenible, debido a los precios del mercado del café, la presencia de plagas, el deterioro de los suelos, la variabilidad de precios de los insumos, entre otros. Estos aspectos son matizados por algunas de las entrevistas:

³⁷ La Federación Nacional de Cafeteros, ha representado un “punto de intersección y dirección entre los productores, el Estado y el mercado internacional” (Lombo, 2013, p. 29), participando en el mercado del café como reguladora, orientadora y líder en la implementación de prácticas, reglas y otras directrices en esferas económicas, productivas, sociales y políticas para el sector cafetero.

“La presencia de la Federación ha sido positiva, por una parte, pero negativa por otra parte. La Federación, en sí el Comité le compra el café al campesino, pero le paga dependiendo de cómo se comporta el mercado. Entonces a veces les paga bien, a veces mal. Aunque pague bien no compensa, pero fijo tiene comprador. Los precios del café son muy vulnerables y varían mucho: un día está a 800, a otro día a 820 y cuando menos piensa cayó a 600. Entonces una arroba de café para producirla cuesta mucho y hay gente aquí que vende la arroba a 30 mil pesos y eso no le va a dar. Le dará escasamente para pagar al trabajador y no le queda para el sustento” (Trujillo, septiembre de 2016).

“[La Federación] estaba asumiendo responsabilidades que no lo correspondían como institución, pero aun así las asumía. [Con las crisis, el Comité dijo] olvidémonos de todo lo demás que no tiene que ver con café y entonces el Comité comenzó a desligarse de todo ese tema de responsabilidades. Claro no se puede descuidar del todo el sector y el Comité sigue haciendo presencia y sigue haciendo inversión, pero ya lo hace en forma de convenios” (Trujillo, septiembre de 2016).

Otros actores con un importante papel en la promoción de la economía campesina corresponden a organizaciones de la Iglesia Católica y organizaciones campesinas. A través de acciones de acompañamiento estas entidades han sido de gran importancia en el fortalecimiento productivo del municipio, apostando por la construcción de alternativas para paliar los efectos de la crisis del café. Si bien algunas, como el Instituto Mayor Campesino (IMCA), venían haciendo presencia en la zona desde la década de los sesenta, a finales de los 80 refuerzan su accionar con el objetivo de erigir alternativas económicas para los sectores campesinos.

El IMCA fue fundado por el padre Francisco Javier Mejía S.J en 1962³⁸ con un especial énfasis en la promoción del trabajo asociativo y cooperativo (CNRR, 2008), aspecto que fue clave en el impulso organizacional de la zona (CNMH, 2014). Desde una perspectiva pastoral, esta institución orientó sus acciones de acuerdo a las siguientes líneas: “desarrollo rural, reordenamiento territorial, participación política de la comunidad, soberanía alimentaria, equidad de género y de generación (...)” (CNMH, 2014, p. 165). El acompañamiento redundó en el fortalecimiento organizativo. En alianza con la Federación Agraria Nacional (FANAL) y con la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) promovieron la constitución de las juntas de acción municipal y local, promoviendo además la conformación de sindicatos agrarios. Este aspecto puede ser corroborado a través de fragmentos de las entrevistas realizadas en la zona:

“En las veredas montañosas el IMCA desarrollaba una serie de programas. Esta institución, como otras hacían inversión donde el Estado no lo hacía. Ellos sí que impulsaron la organización y el desarrollo económico, pero esto se paró con el conflicto” (Trujillo, agosto de 2016).

³⁸ El IMCA nace en 1962 como la Universidad Campesina (UNCA), y a mediados de los años 70 pasa a llamarse el Instituto Mayor Campesino encargado de la promoción social con enfoque en Desarrollo Rural Integrado.

La relación del IMCA con Trujillo es una larga historia realmente. Para no irnos muy atrás el IMCA hacía presencia en Trujillo desde la década de los setenta. El IMCA trabajaba muy de cerca con el Padre Tiberio³⁹, quien se había formado aquí en el IMCA, no era jesuita, él era diocesano, pero se había formado aquí y por lo tanto mucho del trabajo que él realizaba en Trujillo había sido inspirado en su trabajo en el IMCA y en la formación que él había tenido acá. (Buga, agosto de 2016).

Esta institución, en asocio con Pastoral Social y con las organizaciones referidas antes, como parte del fortalecimiento organizativo “promovió la constitución de tiendas comunitarias y asociaciones productivas, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida del campesinado” (CNMH, 2014, p. 181 citando a Escobar, 1987). El acompañamiento se constituyó en un soporte para que el campesinado de la región construyese alternativas socioeconómicas para enfrentar de manera autónoma la debilidad institucional y los impactos de la crisis. En las entrevistas realizadas con algunos miembros mayores de la comunidad, se señaló la importancia de la constitución de las tiendas comunitarias como una alternativa a la no presencia del IDEMA en la zona:

“Acá el IDEMA hizo muy poca presencia. En otros municipios uno veía que ellos tenían bodegas y compraban al campesino la producción de otros productos que no fueran café y también tenían tiendas comunitarias. Acá no hubo nada de eso, yo digo que eso tiene que ver con que aquí no había voluntad política y con que como éramos cafeteros y la Federación estaba, pues no le ponían atención a otros temas. Las tiendas comunitarias que teníamos acá las gestionó el IMCA con el padre Tiberio. Estas tiendas pues vendían a precio justo lo que nosotros no producíamos. Me acuerdo que también compraban lo que a veces se producía que no fuera café” (Trujillo, agosto de 2016).

Las acciones de fortalecimiento organizativo del campesinado, las que como se ha sugerido se enfocaron sobre todo a la construcción de alternativas productivas, generaron una serie de conflictos con los gamonales del municipio, quienes comenzaron a ver cómo estas alternativas estaban aportando a la recomposición económica de la zona; y tal como lo establece CNRR (2008) estaban conllevando a “una creciente autonomización de las organizaciones campesinas, reunidas en las Juntas de Acción Comunal, frente a los partidos políticos de la región” (p. 97). Los conflictos con el poder gamonal de Trujillo “representaba, potencialmente, una corriente contracultural, que contradecía tanto el modelo tradicional y jerárquico de la sociedad rural dominada por los latifundistas y gamonales locales como el modelo emergente impulsado por los narcotraficantes.” (CNRR, 2008, p. 95)

De esta manera, la organización campesina, materializada en empresas, asociaciones, tiendas y cooperativas, fue señalada como una amenaza para distintos actores con intereses políticos y económicos sobre el municipio. Posteriormente, esta nueva organización sería víctima de fuertes represalias

³⁹ Cómo veremos en los siguientes párrafos el padre Tiberio jugó un papel fundamental en la consolidación de procesos socioeconómicos del campesinado de Trujillo.

violentas que terminaron desagarrando el tejido social y por ende debilitando aún más la capacidad productiva de los campesinos de la región.

Entre estos actores otro que fue fundamental fue el padre Tiberio, quien adpto el papel de líder social. Tal como se dijo antes, el padre hizo parte de los procesos de formación impartidos por el IMCA. Él llegó a Trujillo en 1985 y desde su arribo enfocaría su trabajo a continuar y fortalecer los procesos organizativos campesinos promovidos anteriormente por organizaciones como el IMCA, FANAL y la ANUC. Sobre este aspecto resalta uno de los entrevistados:

“Llega Tiberio y comenzamos a trabajar desde la Iglesia con Tiberio para cambiar la situación del campesinado. Entonces Tiberio entra a mediar en esa situación tan difícil a favor del campesino. Entra a reclamarle al estado mayor presencia, pero además llega a promover al campesinado para que se organice productivamente con alternativas al café” (Trujillo, septiembre de 2016).

Además, Tiberio al arribar a Trujillo tomó conciencia de la grave situación socioeconómica que enfrentaba el campesinado, debido a su exclusión política y a la crisis del café. Él llamo la atención sobre cómo la dependencia productiva conllevó a que el campesinado desarrollará patrones productivos que no redundarían en su bienestar. Observó cómo las personas eran despojadas por los bancos en la medida en que no podían pagar las deudas contraídas para continuar con la producción de café, el cual no era rentable en el marco de la crisis. Por otro lado, veía que el Estado hacía poca presencia y no cumplía con sus labores, llamando la atención sobre que la alcaldía era un fortín político de terratenientes del Valle. Sobre estos aspectos señalados, en una de las entrevistas se afirma lo siguiente:

“El padre Tiberio llega y comienza a estructurar unos procesos diferentes. Comienza por formar empresas comunitarias y decirle al campesino sus derechos. Él es el único que se atreve a reclamarle a Cartón Colombia por qué abusaba de los campesinos. Comenzó a decirle a los politiqueros: ustedes no tienen por qué jugar con la gente de esa forma” (Trujillo, septiembre de 2016).

Desde su llegada hasta su asesinato se conformaron 45 empresas comunitarias, las que estaban orientadas por “(...) un plan de trabajo pastoral que promovía el trabajo comunitario y asociativo entre la comunidad rural y urbana del municipio” (Machado y Rincón, 2009, p. 81). El trabajo del padre no sólo buscaba fortalecer alternativas económicas diferentes al cultivo del café (como la producción de mora, materializada en empresas comunitarias como Asomora⁴⁰), sino también configurar redes sociales en torno a lo productivo. Además de las empresas comunitarias “se impulsaron grupos de la tercera edad, comités de cuadra y otras empresas familiares, entre las que se cuentan ebanisterías y panaderías” (CNMH, 2014, p. 184).

⁴⁰ La Asociación de Cultivadores de Mora y similares ASOMORA de Trujillo Valle, es una empresa asociativa de trabajo, conformada por pequeños agricultores dedicados al cultivo de mora.

En este sentido la gestión del padre Tiberio gestión tuvo un carácter social, dado que, como resultado del acompañamiento para el desarrollo de actividades productivas, se constituyeron importantes redes sociales. Al respecto un habitante del corregimiento de El Tabor menciona hace referencia a la tienda comunitaria que existió en el corregimiento:

Si, fue muy bueno porque casi toda la gente se asoció a esa tienda, la gente iba a comprar la remesa ahí. Eso fue una cosa muy buena porque ahí estaba el centro de acopio, todo lo que uno iba a comprar al pueblo se encontraba ahí. (...) Y nos reuníamos todos ahí, mejor dicho, el sábado y domingo era muchísima gente de la región ahí porque no teníamos que ir al pueblo a remesear, sino que ahí mismo comprábamos todo (El Tabor, enero de 2017).

El padre Tiberio Fernández y los procesos organizativos que impulsó, apuntaban a configurar un modelo económico campesino, basado en prácticas socio-productivas ancladas en el cooperativismo y la solidaridad comunitaria. Sin embargo y tal como lo establece el CNMH (2014) los procesos jalados por el padre compartieron “(...) historia y herencia con una serie de lógicas configuradas históricamente en las otras violencias: las de los años cuarenta, cincuenta y sesenta. La Iglesia Católica, en el marco de sus principios, así como otras organizaciones de carácter social y político campesinistas, incidieron política y socialmente sobre el campesinado durante muchas décadas, derivando su presencia en una serie de conflictos que enfrentaban en no pocas ocasiones a los gamonales locales, la Iglesia Católica, el campesinado y sus organizaciones” (p. 416).

Escalonamiento del conflicto armado⁴¹

Bajo la perspectiva de Pizarro (2004) entendemos el conflicto armado en Colombia, primero como un conflicto armado interno, (inmerso en un potencial conflicto regional complejo), de carácter irregular, prolongado en el tiempo y con raíces ideológicas en su origen. De acuerdo con Trejos (2013), se puede afirmar que en los últimos 30 años el conflicto ha presentado características diferentes: incremento de las violencias contra la población civil (violaciones a gran escala de Derechos Humanos); la presencia y auge de actores como los grupos paramilitares y los carteles del narcotráfico; nuevas fuentes de financiación de la guerra; y la transformación de los objetivos ideológicos en intereses exclusivamente económicos. Kaldor (2001), mediante el concepto de Nuevas Guerras, ofrece una categorización útil en tanto establece que el escenario de las guerras actuales no permite hacer una distinción clara entre la violencia propia de las confrontaciones

⁴¹ En Trujillo la violencia no es nueva. Este municipio fue afectado por la violencia bipartidista. No obstante, este documento, toma únicamente las dinámicas de violencia presentes en el conflicto armado desde mediados de los años 70 hasta mediados de los años 2000. Lo anterior, en razón de que las dinámicas de violencia que se presentaron en dicho periodo, poseen unas características que transformaron la lógica del conflicto, y se tornaron en elementos influyentes en el deterioro de la capacidad productiva del campesinado en la región.

armadas, la violencia del crimen organizado y la violación sistemática de los Derechos Humanos.

En segundo lugar, comprendemos el conflicto armado (o el escalonamiento) como una de las estrategias usadas para recomponer el patrón de acumulación capitalista y en sentido estricto reorientar el modelo productivo de las zonas rurales de Colombia. De acuerdo con lo afirmado, este caso de estudio, devela la estrecha conexión entre los reacomodamientos de los patrones productivos en las zonas rurales y la irregularización de la guerra. Intentaremos mostrar cómo la presencia y control territorial por parte de actores del narcotráfico y de actores armados, quienes desplegaron repertorios de violencias simultáneas y sucesivas (asesinatos, masacres, intimidaciones, amenazas y persecuciones, tortura, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, confinamientos, robo de bienes, desplazamientos forzados), incidieron en la pérdida de la capacidad productiva del campesinado. Además mostraremos como las acciones de los armados, al hacer mella en los procesos económicos alternativos jalonados por la Iglesia y por otros actores, exacerbaron los impactos de la crisis del café a finales de los 90 y el histórico olvido institucional.

Según Muñoz (s.f.), el escalonamiento de la guerra en Colombia ha contribuido a “crea[r] ambientes de incertidumbre en las decisiones productivas” (p.2) del campesinado. Además del deterioro de la infraestructura física como consecuencia de las acciones violentas, y de las violaciones a gran escala de Derechos Humanos, afectando el capital social, dicho escalonamiento ha “crea[do] distorsiones en los mercados agrícolas, reduc[ido] la capacidad y dinámica de los mercados laborales, debilita[do] la credibilidad de las instituciones, crea[do] flujos de desplazamiento involuntario, entre otros” (Muñoz, s.f., p.2)

Las violencias han contribuido al incremento de las condiciones de vulnerabilidad económica del campesinado. En este contexto “los hogares modifican sus decisiones de inversión y producción de largo plazo, incorporando productos de rápida cosecha y buena rentabilidad o, en algunos casos, las fincas son abandonadas o reestructuradas a una producción de supervivencia” (Muñoz, s.f., p.3).

En cuanto al caso de Trujillo, apelamos a lo establecido por el CNRR (2008), quien define a este municipio como un “escenario en el cual son observables múltiples ejes de conflicto, actores y procesos que se entrecruzan, con pesos diferenciados en el desencadenamiento y en el desarrollo de la dinámica violenta” (p.14). A partir de esta definición, en dicho escenario hemos reconocido dos momentos específicos que dan muestras del proceso de escalonamiento de la guerra. Dichos momentos se pueden delimitar de la siguiente manera:

1. Finales de la década del ochenta hasta finales de los 90. Según el CNRR (2008) en este momento “es posible rastrear en el escenario local, de una parte, proyectos expansivos y superpuestos de actores como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y de organizaciones del narcotráfico (...)” (p. 14).

Las acciones de estos actores “obedecían a cálculos estratégicos de control territorial” (CNRR, 2008, p.15).

2. Finales de los 90 hasta la primera década del siglo XX. En este lapso se dio el arribo y posicionamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la zona. En 1998 arriba a la zona el Bloque Calima. La CNRR (2008) establece que “con el pretexto de una estrategia contrainsurgente se fundará en Trujillo una de las variantes del paramilitarismo: la alianza de agentes del estado con actores locales o regionales, en este caso del narcotráfico” (p. 15).

- **Narcotráfico, guerrillas y campesinado**

Los procesos organizativos jalonados por la Iglesia y la serie de actores referenciados conllevaron cambios importantes en la relación estado – sociedad. Los campesinos de la zona, además de constituir procesos económicos alternativos, comenzaron a interpelar a la institucionalidad y al poder gamonal. Asociaciones y cooperativas no solo se erigieron como escenarios de producción y comercialización, sino también en contextos de formación de liderazgos políticos⁴². Los gamonales comenzaron a asociar los cambios con brotes de subversión, aspecto que trajo consigo el incremento de acciones violentas contra la población civil.

En este contexto, el 29 de abril de 1989 se llevó a cabo una marcha campesina, respaldada por el padre Tiberio, a la que se sumaron las organizaciones productivas de tipo comunitario que habían surgido de su iniciativa. La marcha tenía como objetivo demandar “arreglos de vías, escuelas, servicios médicos, titulación de tierras y créditos” (Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz [CINEP/PPP], 2014, p. 14). Estas demandas a su vez se encontraban relacionadas con la difícil situación económica derivada de la crisis en la producción agrícola del café.

Las autoridades estatales locales, el Ejército y la Policía del municipio, vincularon dicha marcha con las organizaciones guerrilleras, principalmente con el Ejército de Liberación Nacional. En este contexto, los procesos productivos comunitarios se comenzaron a percibir institucionalmente como actividades promovidas por la insurgencia. (CNHM, 2014). Esta afirmación es corroborada por un extracto de una de las entrevistas realizadas en la zona:

“La organización nos abrió los ojos y entonces comenzamos a marchar a y pedir al Estado solución. Ya se venían dando los efectos de la crisis del café y vimos que la situación estaba, pero cada vez, entonces decidimos marchar. Tiberio y otros nos acompañaron. Ahí es que se hace visible el poder que surgía de los procesos que íbamos teniendo en lo productivo y entonces a los gamonales les da miedo. Como

⁴²En palabras del CNMH (2014) los procesos organizativos de la población rural “(...) que, influenciadas por el contexto nacional de lucha por la tierra, demandaron ante el Estado reivindicaciones sociales, políticas y económicas, a pesar del ejercicio recurrente de la violencia” (p. 418).

se había asentado la guerrilla por esa época entonces de una nos vincularon con ellos” (Trujillo, enero de 21017).

Las entrevistas y lo establecido en los estudios del CINEP/PPP (2014) y del CNMH (2014) sobre Trujillo, evidencian que en el fondo el problema se resumía en que la movilización campesina estaba apuntando a reestructurar el poder gamonalicio en la zona. En este contexto las comunidades fueron víctimas de una serie de retaliaciones por parte del Ejército Nacional, miembros de la Policía municipal y fuerzas del narcotráfico. En este contexto, en 1990 asesinaron al padre Tiberio Fernández. Uno de los objetivos de su asesinato fue el resquebrajamiento y debilitamiento de los procesos organizativos, las empresas y tiendas comunitarias, y las asociaciones productivas. En sí, se apuntaba a desestructurar el tejido socioeconómico que se había ido entretejiendo con el apoyo de la Iglesia y otros actores. Este debilitamiento tenía como fin propiciar las condiciones idóneas para que el narcotráfico pudiese tener un mayor control sobre el territorio.

La muerte de Tiberio y de otros campesinos tuvo un efecto devastador en las organizaciones campesinas, quienes “(...) dejaron de intervenir en la vida política de los municipios (...)” (CNMH, 2014, p. 418). Además, estas “(...) se fueron transformando en expresiones que, sin cuestionar el orden local, ni disputar hegemonías, trataron de sobrellevar sus vidas en medio de la violencia, renunciando potencialmente al modelo de desarrollo rural impulsado en otros tiempos por la Iglesia Católica y por las organizaciones campesinas (...)” (CNMH, 2014, p. 419).

El IMCA intentó hacer frente al asesinato de Tiberio y a las masacres de campesinos ⁴³ que le antecedieron y le siguieron, dando continuidad y acompañamiento a los procesos, sin embargo, cuando fue más cruda la violencia tomaron la decisión de retirarse de la zona por razones de seguridad. Uno de los integrantes del IMCA refiere al respecto:

“El IMCA sale a comienzos de los noventa, es decir cuando la violencia se recrudece más en el municipio. Sale de allí, pero se mantuvo, casi que de manera permanente el contacto con el municipio, no porque el IMCA tuviese proyecto allí de trabajo directo sino más a través de los jesuitas, o sea los jesuitas siempre mantuvieron un vínculo casi que permanente, de hecho, lo siguen teniendo, muchos de los que ha[n] pasado por aquí tienen una relación directa con algunas comunidades de Trujillo” (Buga, agosto de 2016).

Otra variable a considerar para comprender la complejidad del contexto es que a finales de la década de los 80 se exacerbaron los conflictos por el control territorial del municipio entre guerrillas y narcotráfico. La CNMH (2014) observa que el posicionamiento de las insurgencias en la zona se dio a comienzos de esta década, cuyo objetivo era el control geoestratégico. Así, “Grupos como el Movimiento 19 de

⁴³ Según el CNRR (2008), “entre 1988 y 1994, en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío (noroccidente del departamento del Valle) se registraron, según los familiares y organizaciones humanitarias, 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada (...)” (p. 13).

Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomaron como centros de operación las zonas montañosas del departamento [del Valle del Cauca]” (CNMH, 2014, p. 211). En el caso específico de Trujillo, se evidenció la presencia del M-19 y del ELN. El control que se buscaba, fue principalmente el de la vía que conduce al Cañón de Garrapatas.

En cuanto al narcotráfico, desde comienzos de la década de los 80 hacen presencia en la zona una serie de actores que el CMNH (2014) denomina como “narcotraficantes recién “coronados como capos”, buscando controlar una ruta de producción, procesamiento y comercialización de coca ubicada en el cañón de las Garrapatas” (p. 213). De acuerdo con el CNRR (2008) estos actores establecieron alianzas con las fuerzas de seguridad del estado.

El accionar frente a la sociedad civil de uno y otro grupo fue diferenciado. Mientras las guerrillas se comprometieron a respetar y no interferir con las organizaciones comunitarias, los narcotraficantes ejecutaron una serie de acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario -DIH- y de los Derechos Humanos. Estos, en connivencia con el Ejército y la Policía, implementaron un repertorio de violencias contra la población civil. Con el argumento de acabar con las guerrillas asesinaron, amenazaron, desaparecieron, torturaron y desplazaron “a aquellos que desde la perspectiva de los victimarios eran simpatizantes y/o colaboradores de la guerrilla del ELN” (CNRR, 2008, p.39).

Es de destacar que la relación entre las organizaciones guerrilleras y la comunidad, en un principio, no presentó mayores inconvenientes para el desarrollo de los procesos productivos comunitarios. Las acciones de la insurgencia no incidieron en los procesos organizativos, dado que no era de su interés cambiarlos o transformarlos. Al respecto, un habitante del corregimiento El Tabor menciona:

“Lo más bueno fue que la guerrilla estuvo por acá pero la guerrilla a nosotros no nos hizo nada, a nadie, fue gente normal, común y corriente, charlando así como llegar usted y saludar y empezar a, como el cuento, a lavarnos el cerebro y que la guerrilla va a cambiar al país, que necesitamos que usted nos colabore y uno pues al principio decía que la guerrilla bien pero no sabíamos el problema en el que nos esta[ba]mos metiendo” (Entrevista realizada habitante corregimiento El Tabor, 12 de agosto de 2016).

Sin embargo, esta relación fue interpretada por gamonales y narcotraficantes como una señal de alianza entre insurgencias y campesinado. En esto se justificó el accionar violento. Muchas de las personas que fueron asesinadas a finales de los 80 y comienzos de los 90 fueron señalados como guerrilleros. Detrás de todo esto, como se sugirió antes, estaba una apuesta por el debilitamiento de procesos organizativos y su deslegitimación. Con las acciones violentas comenzó la destrucción del tejido social comunitario, el que se había ido consolidando a través de los procesos asociativos, desarrollados con el apoyo del padre Tiberio y el IMCA.

Las primeras masacres en la zona estuvieron asociadas directamente con el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, hechos que tienen relación con la pérdida de factores de producción (tierra y fuerza de trabajo). Este aspecto fue manifestado por uno de nuestros entrevistados:

“La situación aquí a comienzos de los 90 se vuelve un tira y afloje entre guerrilla, paracos, Ejército y narcotráfico. Entonces los campesinos comienzan a irse de la región, a muchos los desaparecieron. Estos eran territorios vetados para nosotros. No podíamos salir de los alrededores de Trujillo sin un permiso del Ejército, de la misma guerrilla o los mismos paracos (Trujillo, enero de 2017).

Como se explicitó antes, el acceso al capital (crédito) ya venía siendo problemático con la crisis del café, pero fue con el escalonamiento de la guerra que la pérdida de factores de producción se dio con más fuerza. De acuerdo con la perspectiva de esta investigación, sí bien la zona estaba enfrentando los primeros impactos del cambio en el modelo productivo del café, con la guerra se exacerbaron los impactos. Al respecto en algunas entrevistas se menciona lo siguiente:

“Es que la guerra nos llegó con la crisis del café, entonces por un lado perdíamos la tierra, por las deudas y entonces los bancos se las iban vendiendo a los narcos y por otro pues los que se desplazaron perdieron las tierras. Con las fincas dejamos todo. Todo esto quedó solo, las casas quedaban abiertas, los animales se morían de hambre, nosotros vivimos todo eso, nosotros vivimos una violencia muy fuerte desde el 88 para acá y es que con esa violencia perdimos mucho” (Entrevista realizada habitante corregimiento El Tabor, 12 de agosto de 2016).

“La productividad comenzó a afectarse. La gente había salido del café y los que habían incursionado en otros ámbitos productivos se vieron muy afectados. Es que apenas estaba comenzando la producción, se había logrado alguna rentabilidad, pero con las primeras masacres, la muerte de Tiberio y todo lo que pasó, las cooperativas y asociaciones se frenaron. La gente se desplazó. Las fincas quedaron abandonadas. Comenzó en este tiempo la reducción productiva en la zona. Obviamente el desplazamiento afectó la capacidad productiva de la zona. Afectó el conflicto la inversión productiva en la zona. Por ejemplo, con el padre Tiberio se había iniciado la producción de frutales y eso quedó allí (Trujillo, septiembre de 2016).

Sobre la relación entre la crisis cafetera y el escalonamiento de la guerra, Rettberg (2012) considera que la caída de los precios internacionales del café condujo a la disminución de los ingresos de los campesinos, aspecto que empeoró los niveles de pobreza en las zonas cafeteras y “afectó la capacidad de la Federación de Cafeteros para compensar la ausencia del Estado en la provisión de estabilidad económica y servicios sociales” (Rettberg, 2012, p. 86). Para la autora el deterioro de los indicadores sociales y el hueco institucional que ocasionó la reconfiguración de la FNC abrió “ventanas de oportunidad para la penetración de las estratégicas tierras cafeteras por parte de grupos armados ilegales por medio del reclutamiento y el control territorial, para impulsar los cultivos ilícitos e insertar capitales del narcotráfico en la economía legal” (Rettberg, 2012, p. 86). Además, es de considerar que la producción cafetera y la presencia de la Federación se habían

constituido en barreras contra la violencia, sin embargo “la crisis económica llegó acompañada del empeoramiento de los indicadores del conflicto armado, como los homicidios, los secuestros y los ataques (Palacios, 2009, p. 96).

En el contexto de Trujillo lo anterior se hizo evidente, principalmente, en la compra de fincas campesinas, que habían sido embargadas por la banca privada o abandonadas por causa de la violencia, por parte de testaferros. Este aspecto es señalado en una de las entrevistas:

“(…) con el embargo de las fincas muchos perdieron sus tierras, esto era aprovechado por los narcos, que comenzaron a comprar como una manera de lavar los dineros” (Trujillo, enero de 2017).

“Los narcos aprovecharon y si no compraban las tierras perdidas por los campesinos, las quitaban a la fuerza. Estos amedrentaron a más de uno para que deje las tierras” (Trujillo, enero de 2017).

- **Se suma otro actor: el Bloque Calima**

Las acciones guerrilleras, durante el primer lustro de los 90, limitaron la expansión del narcotráfico. Las insurgencias incrementaron las “(...) acciones militares, las extorsiones y los secuestros, produciendo la reacción desmedida de narcotraficantes y algunos integrantes de las élites regionales” (CNMH, 2014, p. 218). La estrategia implementada por los actores referidos fue acordar “la entrada de los paramilitares a la región, al finalizar los años noventa” (CNMH, 2014, p. 218). Exactamente en 1999 arribó a la zona el Bloque Calima⁴⁴. La presencia de esta facción paramilitar en el municipio apuntaba a “(...) garantizar el control del orden regional y el papel de élites ligadas a la economía legal, así como de empresarios criminales asociados a la economía del narcotráfico, librándolos del asedio y la amenaza guerrillera” (CNMH, 2014, p. 218).

Su accionar, en primer lugar, se enfocó en debilitar y sacar al ELN de la zona y, en segundo lugar, en alianza con miembros del narcotráfico, a controlar las rutas del tráfico de armas y droga, así como a la movilización de tropas hacia el Pacífico. Sobre este aspecto en algunas de las entrevistas se señala:

“Los paramilitares llegaron a controlar más que todo es esa carretera que sale al Cañón del Garrapatas. Es que a los narcos les interesaba mucho tenerlo, porque es que por esa vía se sale de la cordillera occidental al Chocó. Esas son unas trochas muy estratégicas, y de aquí se sale rumbo al río San Juan y, de ahí, a Buenaventura o por esta parte del Darién. Es un corredor estratégico para ellos, entonces es lo que buscaban controlar los grupos del narcotráfico y lo paramilitares” (El Tabor, 11 de agosto de 2016).

⁴⁴ En palabras de Insuasty, Valencia y Restrepo (2016) la creación del Bloque Calima se dio en julio de 1999 “cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU de Fidel Castaño, decidieron desplegar su accionar dentro del área de influencia del Valle del Cauca, Cauca, Huila y Quindío y así enfrentar a las guerrillas de las FARC-EP, Frente 6º, y al ELN” (p.130).

“Cuando llegaron los paracos, entonces ellos comienzan a querer dominar territorialmente. Como somos una zona tan atractiva, porque hacia arriba está el corredor hacia el Cañón del Garrapatas, que conecta al Valle con el Chocó. Por ese camino tres o cuatro días se está en el mar. Entonces eso es lo que pelean ellos siempre, un territorio para ellos poder mantener la zona. Entonces el campesino estaba obligado a tenerlos allí. Entonces uno entraba a la zona con miedo. La gente le decía a uno, ándese por los laditos. Me decían "ve ándate que esa gente de está mirando mal". La gente lo ponía a uno en pre aviso, porque saben cómo era la situación” (Trujillo, agosto de 2016).

Como parte de su accionar el Bloque Calima desplegó una serie de repertorios de violencia contra el campesinado de la zona. La violencia extrema y el terror se usaron como tácticas de escarmiento y control social. Las acciones violentas se realizaron principalmente “(...) en zonas en las que la guerrilla había avanzado en los últimos años y que representaban gran importancia para algunos empresarios y narcotraficantes” (CNMH, 2014, p. 260). Las masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, persecuciones, asesinatos selectivos, amenazas, contra el campesinado buscaban en primera instancia “(...) cortar los corredores construidos por la guerrilla” (CNMH, 2014, p. 260); en segundo lugar debilitar el apoyo social que el ELN tenía entre el campesinado organizado y además bloquear y acabar con los esfuerzos organizativos comunitarios estructurados en la década de los 80’s por parte de los campesinos y la Iglesia; y, tercero promover la desocupación de tierras en las zonas altas y también en las planas, con el fin de favorecer las condiciones para una posterior adquisición por parte de Smurfit, de narcotraficantes, empresas azucareras, entre otros.

Bajo la perspectiva de esta investigación, aunque es factible que pasara en el momento anteriormente referenciado, con la presencia de los paramilitares es que se establece un mayor control territorial. Los miembros de esta estructura criminal se posicionaron en varias de las veredas, imponiendo normas y regulaciones a través de la violencia física y simbólica. Este aspecto es corroborado en el siguiente aparte de una de las entrevistas realizadas en la zona:

“Lo que se vivió con los paras fue tremendo, porque aquí, aquí mantenían un retén, en todos estos caseríos ellos mantenían un retén, y controlaban quién entraba y quién salía, controlaban qué hacíamos” (El Tabor, agosto de 2016).

Sí bien el control territorial se manifestó directamente con el control de las vías que servían de rutas para el tráfico de drogas y de armas o para el avance de las tropas, en el caso que nos atañe, este abarcaba una serie de mecanismos de intervención de la vida cotidiana de la gente, intervenciones que la afectaron en el plano socioeconómico. Para matizar lo dicho, es necesario considerar que (tal como se estableció en anteriores apartes) el campesinado de la zona a comienzos de la década de los 90, enfrentaba los impactos de la caída internacional del precio del café debido a la ruptura del Pacto. La fragilidad económica se trató de sortear a través del fortalecimiento y consolidación de procesos productivos alternativos. Esta mediana recomposición se vio afectada con los primeros signos del escalonamiento de la guerra en el territorio. A partir de la llegada del Bloque Calima y de miembros

de la fuerza pública se debilitaron definitivamente los procesos económicos campesinos, los cuales generaban un empoderamiento de la comunidad. El asesinato de líderes comunitarios tuvo el objetivo de aminorar el tejido sociopolítico, para así poder establecer el control territorial sin ningún tipo de resistencia por parte de la comunidad. Este aspecto es referenciado por algunos entrevistados:

“Las acciones violentas destruyeron un tejido social comunitario que habíamos ido construyendo con el apoyo del padre Tiberio y por el que nosotros nos habíamos esforzado. Eso es difícil de reconstruir” (Trujillo, septiembre de 2016).

“Hace como 25 años había muchos líderes, habían 5 o 6 líderes y esos líderes fueron amenazados, entonces ya la gente se fue abriendo, ya uno se retiró de esos grupos” (Trujillo, septiembre de 2016).

Como señala Muñoz (s.f.), las implicaciones microeconómicas de la presencia permanente o casi permanente de grupos armados en las zonas campesinas del país no han sido suficientemente estudiadas. Siendo este uno de los objetivos de esta investigación, a continuación presentamos los principales impactos asociados a las acciones violentas por parte del Bloque Calima:

✓ **Desestructuración del mercado laboral y deterioro de los salarios**

Muñoz (s.f.) señala sobre cómo la presencia de paramilitares conllevó a que, en las zonas tradicionalmente cafeteras en Colombia, se minimizara el número de cosecherxs disponibles, quienes por lo general eran traídos de otras zonas del país, como Nariño y Cauca. La ausencia de estxs trabajadorxs temporales en Trujillo se puede explicar, en parte, por el miedo que les generaba la presencia de actores armados en el municipio⁴⁵. Este aspecto puede ser corroborado por una de las entrevistas:

“Los pastusos como se les decía acá a los que venían de Nariño, ya no quisieron volver. En parte tenían miedo, pero también es que se estaban yendo a raspar coca” (Trujillo, enero de 2017).

Un escenario en el que el café no es rentable y en el que los paramilitares hacen presencia y ejecutan acciones violentas, no es atractivo para sectores que han vivido de la economía de movilidad, es decir para aquellxs que sustentaban el acceso a medios de vida a través del trabajo asalariado en cultivos de temporada y de alta rentabilidad. Además, la caída de la rentabilidad del café implicó una baja en los salarios. Esto conllevó a que los cosecherxs se movilizasen hacia los cultivos ilícitos.

⁴⁵ En Trujillo la mano de obra para las cosechas era traída del departamento de Nariño. Los cambios en la movilidad laboral, no solo se deben al conflicto armado, sino también a que el norte de este departamento se consolidó como zona cafetera y a que muchas de las personas que anualmente eran contratadas o habían migrado para insertarse en otros sectores de la economía o fungían como raspachines en el mismo departamento.

“Con la crisis el jornal bajó, ya no se podía pagar como antes y entonces la gente ya no quería venir a trabajar y se iban para Tumaco, para el Cauca, para el Putumayo. Porque pagaban mejor que acá, muchos de acá también se fueron para allá. Dejaron el café y se fueron a la coca” (Trujillo, enero de 2017).

✓ Migración y productividad

A la escasez de mano de obra foránea, se sumó la migración de la fuerza de trabajo familiar y comunitaria. Esta migración no solo fue el resultado del despliegue de las violencias por parte de los paramilitares sino también de la baja rentabilidad del café y de otros productos agrícolas como plátano, frutales, maíz. Las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, persecuciones, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento por parte de grupos insurgentes se conjugaron con la crisis de la economía campesina. Así lo refiere un entrevistado:

“Los desplazamientos forzados, pero también que los jóvenes se fueran con los armados o se fueran simplemente se tradujo en pérdida de mano de obra para el campo, o sea es una persona que ya no va ser productiva para el campo” (Trujillo, enero de 2017).

Chayanov señala que “La Fuerza de Trabajo de la unidad de explotación doméstica está totalmente determinada por la disponibilidad de miembros capacitados en la familia” (1974, p. 47). Esta disponibilidad es clave para mantener el equilibrio entre producción y consumo, por lo cual, la migración implicó que las familias se autoexplotasen. Al respecto, Palacios (2009) afirma que “En un contexto más amplio se observa que la dinámica demográfica debilita la economía de las fincas familiares; una parte de sus miembros conforma el fondo de reserva laboral, en un producto muy intensivo de mano de obra” (p. 71).

Lo anterior también puede ser analizado a través del planteamiento de Muñoz (s.f.), quien sostiene que “Los efectos de los choques de incertidumbre tendrá un efecto negativo sobre la producción. La reducción de la producción en su propia finca reduce sus ingresos, lo cual tendrá que ser compensado a través de dos mecanismos: aumentar la mano de obra ofrecida fuera de la finca o incremental el tiempo de trabajo propio en la finca” (p.43). Así, debido a la carencia de mano de obra externa a la finca, las familias se vieron en la obligación de aumentar su participación (en términos del factor trabajo) en la producción agrícola.

De acuerdo a lo anterior, en la región la migración de la población campesina conjuga aquella que es producto de la violencia sociopolítica con aquella que es resultado del deterioro de las condiciones socioeconómicas que enfrentó este grupo en el contexto de crisis del café. Con respecto a la primera. El desplazamiento forzado de población fue una de las estrategias implementadas por los paramilitares⁴⁶. Este, en el caso de Trujillo apuntaba en primer lugar al despojo de

⁴⁶ En palabras del CNMH (2013) “Los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las

tierras. Los campesinos que abandonaron la zona, por causa de la guerra, fueron víctimas de despojo de tierras (legal e ilegalmente). Las fincas pasaron a manos de narcotraficantes y de empresas como Smurfit. En segundo lugar, apuntaba a crear condiciones para el control territorial.

En cuanto a la segundo, la CNMH (2014) reconoce en la crisis del café una de las causas de expulsión poblacional. Los caficultores dada la baja rentabilidad del café decidieron migrar a Cali o a otras ciudades. Algunas personas con un capital mínimo decidieron hacer su vida en otras zonas, en otros ámbitos económicos o vinculándose a la producción de café en regiones emergentes como Huila, Nariño, Cauca.

Sobre una y otra movilización se explicita en un fragmento de las entrevistas:

“Por allá por los 90, ya no era rentable el café y a mí me habían matado a mi papá y a un hermano, entonces decidí coger camino. Con amenazas o sin estas, es que ya el café no era negocio, era mejor coger camino a otros lados para ver qué salía. Así fue que me fui para el Huila, allá me casé y comencé a trabajar en fincas. Después fue que volví a Trujillo, cuando ya la cosa había pasado” (Trujillo, enero de 2017).

La migración de la mano familiar y de “potenciales trabajadores” tuvo como resultado el desequilibrio de las unidades campesinas. El bajo acceso a fuerza de trabajo implicó a su vez una baja capacidad para satisfacer las necesidades de consumo interno de las familias campesinas. Este factor además implicó mayores inversiones, es decir la realización de un mayor esfuerzo por parte de la unidad. De acuerdo con el CNMH (2014) “(...) la finca y la vereda se constituyen en una diada que permite la reproducción económica, social y simbólica de la familia y, a la vez, la reproducción material y simbólica de la comunidad campesina, identificada con el espacio denominado vereda. Son en su conjunto los espacios que permiten garantizar la estabilidad económica, social, cultural y política del campesinado. Al ser afectados por el abandono y el despojo, por el desplazamiento forzado o por las recurrentes modalidades de victimización, el campesinado es vulnerado individual y colectivamente” (p.391).

La migración tanto de carácter económico como aquella asociada al desplazamiento forzado, en muchos de los casos conllevó a que los campesinos se vinculasen a mercados labores flexibles y precarizados. Además de perder los factores de producción, experimentaron un debilitamiento de sus prácticas productivas y de subsistencia.

torturas, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. Además, afectaron a la población civil como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos, y de la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal. La violencia de los miembros de la Fuerza Pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos, y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza” (p. 35).

De acuerdo a lo que se ha venido explicitando, proponemos considerar que el desplazamiento forzado y económico se relaciona con la necesidad de contar con un ejército de reserva, al que fuese posible ocupar en el sector terciario de la economía; proponemos hablar de descampesinización, fenómeno que leemos como un continuum. Este proceso comenzó con el reordenamiento de la productividad que emergió de la implementación de políticas neoliberales, situación paralela al deterioro del conflicto en varias zonas del país, y que se amarra al desplazamiento y al despojo; y se complementa con la intervención a través de los programas de estabilización. En este sentido, las variables referenciadas han operado como dispositivos para la configuración de sujetos productivos que respondan a las demandas del modelo económico vigente: industrialización, construcción de infraestructura en las ciudades, entre otros.

En este sentido existe una estrecha relación primero entre el desplazamiento forzado y el despojo de tierras con miras a la acumulación de la tierra en manos de terratenientes, agroindustria, multinacionales y otros. Segundo entre el despojo y los procesos de descampesinización y proletarización del campesinado. Tanto quienes se quedan en los cascos urbanos de las zonas rurales como quienes llegan a las principales ciudades del país, no solo han perdido sus factores de producción (tierra, mano de obra, capital), sino que además deben incorporarse al mercado laboral urbano, pero en condiciones de precariedad y flexibilización laboral. Los aspectos desarrollados pueden ser ejemplificados a través de un aparte de una de las entrevistas:

“Allá [Bogotá] duré ocho días sin trabajo, sin saber qué hacer y todo desesperado y con ganas de venirme, cuando un día cualquier un amigo me dijo: "ve yo le conseguí trabajo por allá en la rusa" y le dije: "yo medio entiendo, vamos a ver" y allá fui a dar" (El Tabor, 12 de agosto de 2016).

Otro aspecto que se debe considerar, es que durante este periodo el Bloque Calima reclutó a jóvenes de la zona, no solo para que hicieran parte de este ejército, sino para que participaran en la producción y comercialización de la coca.

“Si usted tenía muchachos, cuando menos pensaba en el pelado de catorce y de quince años, adiós, o lo sacaba del pueblo o se los llevaban a la fuerza (El Tabor, 11 de agosto de 2016).

Además, el cambio sociocultural en la población joven, terminó por afectar la economía campesina, pues generó un desarraigo a las actividades agrícolas debido a las actividades de orden ilícito.

“(...) uno ve unos muchachos (...) totalmente perdidos, hemos visto muchachos de aquí de la región en esos grupos, pero ¿por qué? porque son afiebrados a las armas, que a la motico. Entonces aquí tenían el sistema así, son grupos muy estratégicos para coger a los muchachos: les piden un favor y los mandan en una moto y el muchacho afiebrado a la moto se va y, si le pasan un revolver pues mucho mejor y, si le dan veinte mil pesos pues con más veras” (El Tabor, 12 de agosto de 2016).

Esta orientación de la población joven hacia las actividades relacionadas con grupos armados ilegales, se tradujo en una falta de interés por la agricultura, pues el ingreso obtenido de estas actividades no es compartido por el joven con la familia, y no implica el mismo esfuerzo que el presente en las actividades productivas. En este sentido, un relevo generacional en la fuerza de trabajo familiar, que resulta el componente fundamental de la unidad campesina, se vio afectado, dando lugar al deterioro de la capacidad productiva de las familias campesinas.

✓ **Bloqueo de los canales y mecanismos de comercialización.**

Los paramilitares del Bloque Calima impusieron horarios para que las personas de la zona se movilizasen por las carreteras. Además, instauraron retenes ilegales en zonas específicas del municipio, cómo fue el caso del corregimiento de El Tabor. El objetivo del retén en este lugar fue el control del tránsito hacia el Cañón del Garrapatas. Esta táctica de los armados impactó la economía campesina. En primera instancia porque ellos disponían quiénes podían ir de un lugar a otro. Las personas dependían entonces de las decisiones que estos actores tomaran. Si necesitaban ir a jornalear a otras fincas, bajar al pueblo los productos agrícolas, participar en capacitaciones del Comité (o de otros actores), debían pedir permiso o esperar a que los retenes se retirasen. Sobre este aspecto refiere uno de los entrevistados:

“Los retenes los ponían donde les daba la gana, era una forma de estarnos controlando. Nos decían que era para que la guerrilla no se metiera, por allá en el pueblo decían que era porque estaban pendientes de pasar la coca para el Cañón, pero para nosotros era puro control. Nos querían tener controlados, para que no nos organizáramos. No podíamos ir a trabajar a otro lado, no podían subir a jornalear. No podíamos bajar al pueblo a comprar nada, entonces pues tocaba con lo que uno tenía. Callados y quieticos” (Trujillo, enero de 2017).

Sobre uno de los aspectos que se hizo énfasis en el aparte anterior fue sobre la constitución de las tiendas comunitarias (proceso liderado por el padre Tiberio y el IMCA). Estas tiendas hacían parte de una red de comercialización “(...) que incluía un centro de distribución de bienes de consumo y de productos agropecuarios” (CNMH, 2014, p. 175). Con los primeros signos de escalonamiento de la guerra, quienes gestionaban estas tiendas fueron amenazados, incluso algunos asesinados y otros se fueron de la zona. Las acciones violentas contra estos escenarios se incrementaron con la presencia del Bloque Calima. Los miembros de este grupo paramilitar comenzaron a hacer el control de las tiendas comunitarias y después de los pequeños comercios en manos de locales. Este aspecto impactó no solo en la capacidad de los agricultores de adquirir los insumos y los alimentos que no podían producir en su finca, sino que también incidió en las posibilidades para que estas personas pudiesen comercializar sus productos. Al respecto nos cuentan:

“Es que sí que era jodida la cosa. Comprábamos y vendíamos controlados por ellos. No se hacía nada que ellos no aprobarán. Si yo quería vender un cerdo, una vaca,

pues si ellos no lo permitían no se hacía. Estaban al tanto de qué se vendía y cuánto se vendía en las tiendas y lo que les olía a comunitario, allá llegaban a amenazar y hacer de las suyas” (Trujillo, septiembre de 2016).

Otro de los aspectos, sobre el que enfatizaron las personas entrevistadas fue el de cómo los miembros del Bloque Calima comenzaron a asesinar a los choferes de los jeeps o de otro medio de transporte y a controlar los medios de transporte de la zona. Este aspecto incidió de manera importante en los procesos de comercialización tal como se evidencia en un fragmento de una de las entrevistas realizadas:

“Otra cosa que afectó la producción y la comercialización fue que a muchos choferes los mataron o les tocó irse y no había quién cargara los productos. (...). Entonces ahí ¿quién se afectó? no se afectó solamente la gente sino también se afectaron los productores (El Tabor, 11 de agosto de 2016).

La reducción y limitaciones en cuanto al transporte, conllevaron a una baja en la producción, aspecto que estuvo relacionado con pérdidas para los productores. Estas pérdidas reducían los ingresos. Esta condición restringía las posibilidades de volver a producir y además reducían el acceso a bienes y servicios que no se producían al interior de la unidad. A este panorama de retenes ilegales y controles sobre el transporte, se sumó el cobro de cuotas, tal como se explicita en una de las entrevistas:

“Una de estas veces que estuvieron hubo muerte por eso, porque hubo gente que no quiso pagar su extorsión y a gente le iban y le quitaban una vaquita, un torete o cualquier cosa le quitaban si no quería pagar y estaban con la bulla que iban a cobrar \$15.000 pesos a cada finquero” (El Tabor, agosto de 2016)

El aspecto referenciado implicó además que los campesinos tuvieran que considerar inversiones extras para la producción y comercialización. Esta situación generó que la actividad productiva no fuese considerada una actividad rentable.

✓ **Despojo de factores e insumos para la producción.**

La CNRR (2009) propone un concepto amplio de despojo, considerándolo como “(...) aquel proceso por medio del cual involuntariamente un grupo o un individuo se ven privados material y simbólicamente, por fuerza o coerción, de bienes muebles e inmuebles, lugares y/o territorios sobre los que se ejercía algún uso y disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción de necesidades” (p.30). Además, esta instancia considera que el despojo corresponde a un proceso en el que intervienen varios actores a través de varios repertorios de violencias simultáneos o sucesivos en el tiempo y que no solo implica la pérdida de las tierras,

“(…) sino también de una ruptura con un estilo de vida, una alteración de la relación de la comunidad campesina con su entorno inmediato: llámese finca y/o vereda, con los recursos naturales y con la infraestructura pública y

colectiva, constitutivas ambas de estos espacios, en los cuales se desarrollan, entre otros, procesos de socialización primaria; el aprendizaje de técnicas de producción y de relacionamiento con la naturaleza; y aprendizajes de orden cultural en general. También son los espacios en los que se promueve formas de asociatividad y de cooperación” (CNMH, 2014, p. 390).

De acuerdo con Harvey (2005) el despojo también implica la restricción, limitación o bloqueo de la capacidad para que comunidades, familias y sujetos puedan generar su propia subsistencia. El autor considera que, entre las condiciones para el despojo se destacan: la expulsión forzosa de poblaciones; la supresión de derechos sobre los bienes de uso común; la mercantilización de la fuerza de trabajo (migración); la eliminación de modos de producción y de consumos alternativos; la desarticulación de flujos socio-productivos endolocales; y la producción de otras racionalidades económicas.

Bajo la perspectiva de esta investigación, el despojo en Trujillo operó en dos dimensiones. La primera, de ellas era carácter cotidiano y se evidenció en el control territorial que comportaba el control de la vida diaria y en sí de la vida cotidiana productiva, tal como se explicita en una de las entrevistas:

“Ellos llegaban como perro por su casa. Entonces sí uno tenía un lechón, una gallina, un cerdo tocaba matarlo y darles de comer. Se llevaban a veces las herramientas. Decían préstenoslas que ya se las traemos, que vamos a hacer unos arreglos. Ya no las traían. Imagínese uno con miedo qué les iba a ir a pedir las herramientas. Como no teníamos con qué y ni podíamos bajar, pues qué se podían recuperar. Estos también controlaban los machetes, no les gustaba que el campesino tuviera machete” (Trujillo, septiembre de 2016).

Las acciones violentas de los paramilitares apuntaban al aniquilamiento o control de las “formas y medios tradicionales de vida” (CNMH, 2014). Estos sujetos (los paramilitares) disponían (a la fuerza o a través de la violencia simbólica) de los bienes e insumos de los campesinos para satisfacer sus necesidades. Consideraban la propiedad de los campesinos, los cultivos, los enseres, los animales, los recursos financieros, la mano de obra, como recursos para financiar sus acciones delictivas. En este sentido, no solo recurrían a la extorsión sino también al robo, al pillaje, al “pedir prestado” pero sin devolución. En condiciones de vulnerabilidad y fragilidad económica, los pocos bienes e insumos con los que contaban los habitantes de las zonas rurales del municipio les servían de soporte para tolerar las crisis. El despojo de estos elementos contribuía a agravar la vulnerabilidad, tal como lo evidencia uno de los entrevistados:

“Gallinas, cerdos, vacas, se robaban, también nos obligaban a prepararles comida o darles refugio en las casas. En la pobreza las gallinitas estaban contadas y que nos las robarán pues nos afectaba, nos quedamos sin los huevitos y sin la gallina” (Trujillo, agosto de 2016).

El robo y el pillaje se constituyeron en una de las estrategias de los armados para autofinanciarse. La disponibilidad de comida, refugio y otras condiciones contribuyeron a reducir los costos de su permanencia en la zona, facilitando la presencia de los armados en el municipio. Así, los armados se beneficiaron de este tipo de despojo.

“Se favorecieron con cosas que no parecen importantes. Le robaban al campesino los huevos, las gallinas, los cerdos. Hasta las herramientas les robaban. No solo eran las amenazas, las muertes, era también el robo. Entonces los campesinos no podían tener una gallina o un cerdo o un cultivo de huertas porque iba el maleante y se le llevaba los huevitos, se llevaba la gallina, se le comían el marranito” (Trujillo, agosto de 2016).

En cuanto a la segunda dimensión del despojo, se encontraba el despojo de tierras. Tal como se ha sugerido en algunos de los apartes, este comenzó desde la década de los 80 y estuvo relacionado con varios factores: 1. El embargo por la banca en el contexto de la crisis del café; 2. La compra de las tierras embargadas por parte de empresas y testaferros del narcotráfico; y, 3. La compra u ocupación ilegal (truculenta) de las fincas abandonadas por los campesinos que tuvieron que huir de la zona para proteger sus vidas. El escalonamiento de la guerra influyó en los dos últimos factores. Las crisis cafeteras, aunadas al ejercicio de la violencia extrema, estuvieron en la base de “la expulsión de población rural y la concentración de la tierra (...) en el marco de un modelo económico que desestimuló en apoyo del Estado al campesinado y sus economías, privilegiando el desarrollo agroindustrial ligado al mercado internacional” (Corredor, 1992 y Bejarano, 2011 citados por CNMH, 2014, p. 219).

Desde 1988 los armados (paramilitares y fuerzas aliadas con el narcotráfico) obligaban a los campesinos a vender sus fincas (Estado reconoce 42 nuevas víctimas, 2016). Los precios los estipulaban los compradores. Generalmente estos compradores, si eran testaferros de los narcos, se quedaban con la tierra y si eran paramilitares, después del despojo, la revendían a terceros.

✓ **Productividad y cambio en los patrones productivos**

La presencia de los armados, el despliegue de acciones violentas conducentes a controlar el territorio, los despojos permanentes y los efectos de la crisis del café, impactaron negativamente en la productividad. Uno de los funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- de Trujillo, establece lo siguiente:

“La violencia impactó negativamente la productividad agrícola. Yo tengo referencia de la producción de caña panelera en la zona, la producción de frutales en Chuscal, en Monte Loro. Toda esta productividad se ve afectada, porque la gente se desplazó. Las fincas quedaron abandonadas. Una población, que más aún lo que se llamaría población resistente, fue la que permaneció en la zona a pesar del conflicto, se enfocó. Esta gente siguió sembrando café y plátano, pero lo demás ya no se sembró” (Trujillo, agosto de 2016).

“Con el conflicto sí que hubo una reducción productiva en la zona. Obviamente el desplazamiento afectó la capacidad productiva de la zona. Afectó el conflicto la inversión productiva en la zona. En la actualidad las fincas empezaron a reactivarse productivamente. Lamentablemente en las zonas altas, caso Chuzcales, Monte Loro, de donde la gente salió casi toda, la producción de cultivos frutales no se ha podido recuperar” (Trujillo, septiembre de 2016).

No existen cifras que evidencien el impacto y tampoco se han realizado estudios que vinculen conflicto con productividad, sin embargo, la mayor parte de los entrevistados nos refirió el impacto. Ejemplos de lo afirmado se muestran a continuación:

“El conflicto nos afectó bastante porque se acabó mucho la producción, porque se acabó mucho la producción de la comida. Como pasó allí en la vereda Chuzcales, los paras hicieron ir toda la gente y se acabó el cultivo de mora, se acabó toda la producción de este sector. Y, entonces desde ahí vino también el decaimiento. Ya llegaron esos grupos armados e hicieron ir a la gente. Por allá ahora hay solo dos personas. Todo lo agrícola por allá se acabó. O sea, se acabó el cultivo de mora, la gente se fue. La gente se fue a coger coca. Todos cogieron para allá porque allá estaba mejor” (Trujillo, septiembre de 2016).

“Nosotros teníamos una gran producción de mora y de la mejor mora que existía en el Valle. Quizás de las mejores en el país era la de Trujillo porque era orgánica y de mucha calidad. Incluso alguna vez hicieron el ejercicio con lo moreros, hace veinte años o más, colocaron una mora de la nuestra al aire libre dos días y una mora que llegaba de Cundinamarca que era una grande. Mientras esta se iba fermentando (la de Trujillo) la otra se iba llenando de gusanos (la de Cundinamarca). En esa fermentación, el aroma era más profundo, más rico e incluso el campesino sacaba vino de esa mora y esta otra se llenaba de gusanos. Eso le dio calidad, pero llegó una violencia y eso acabó con todo, todo se vino a pique” (Trujillo, septiembre de 2016).

“Antes de irnos la finca se cayó, ya la masacre fue en esa cosecha, estábamos recogiendo un café y el café se cayó, no pudimos cogerlo, quedamos endeudados, ya no había personal para el trabajo, toda la gente se fue, trabajamos como dos años así y ya al último dije: "yo me voy", ya estaba maluca la cosa y luego la, a los seis meses nos fuimos porque la cosa ya estaba maluca, uno sentía eso” (Trujillo, septiembre de 2016).

De acuerdo con el CNRR (2008) el despojo y el desplazamiento, en un escenario de crisis conllevó a cambios productivos o a reorientaciones en los patrones productivos. La producción de café y alimentos en Trujillo dio paso a la ganadería (intensiva y extensiva) y a la silvicultura. Esta última es un proceso, que desde la década de los 80 hasta hoy, viene siendo impulsado por Smurfit Cartón de Colombia. Tal como se estableció en anteriores apartes, esta empresa aprovecharía, en el marco de las crisis del café (entrada de la broca, la roya y la Ruptura de los Acuerdos) para comprar al banco las propiedades que habían sido embargadas a los campesinos por la falta de pago de las cuotas de los créditos. En

el marco del escalonamiento del conflicto, dicha empresa aprovechó las condiciones de vulnerabilidad en que se hallaba sumido el campesinado para adquirir tierras a bajo precio.

- **Desmovilización y BACRIM**

En 2005 comenzaron los procesos de desmovilización de las AUC. En el municipio de Trujillo este proceso implicó la “(...)redefinición del control territorial por medio de la violencia” (CNMH, 2014, p. 299). Un gran número de miembros del Bloque Calima que “supuestamente” se desmovilizaron, confluyeron en las BACRIM (Bandas Criminales emergentes). Específicamente, en la zona de Trujillo operaron los Rastrojos. Este grupo se reconoce como un ejército compuesto por paramilitares al servicio del narcotraficante Wilber Varela. Con la llegada y posicionamiento de este grupo en la zona se dio una nueva oleada de violencias contra la población civil. Los objetivos principales de este grupo (similar al de otros como los machos) eran “(...) copar los espacios dejados por los paramilitares y controlar los circuitos productivos legales e ilegales, consolidar una base social, así como escenarios de reconocimiento y legitimización social y política” (CNMH, 2014, p. 298). Los Rastrojos retomaron el control de las vías, que, en la zona rural de Trujillo, conducen al Cañón de Garrapatas.

Además de este grupo, las FARC comenzaron a hacer presencia en la región montañosa de Trujillo. Esta insurgencia, dada la arremetida paramilitar y los ataques militares, se replegó hacia las laderas de la Cordillera Occidental. Entre sus objetivos estaba el tomar y retomar el control de Cañón⁴⁷. En específico, se posicionaron “en las cuchillas de los corregimientos de Salónica y la Zulia, municipio de Trujillo” (CNMH, 2014, p. 300). Este emplazamiento “les facilitaba proyectarse al mar Pacífico, a través del río San Juan para comercializar la coca, entre otros productos, así como disputarle el control de los distintos eslabones de la economía de la coca a los Machos y los Rastrojos” (CNMH, 2014, p. 300). Las disputas territoriales entre las Bandas Criminales, se constituyeron en una de las condiciones para que las FARC afianzaran su presencia en la zona.

En este nuevo escenario, la población civil del municipio, quedó en medio del fuego de las FARC y los Rastrojos. Hasta finales de la década del 2000 las retaliaciones entre uno y otro grupo pusieron en alto riesgo a las comunidades. Las acciones armadas exacerbaban la vulnerabilidad de los pobladores. Al respecto uno de los entrevistados refiere:

“En el 2005 es que se entregaron los paramilitares. Quedó una zozobra por ahí dos años, de que iban a volver y que nos iban a matar, cuando aparecieron los rastrojos, eso salía uno y entraba el otro. Estos se enfrentaban con las FARC permanentemente por el control” (Trujillo, agosto de 2016).

⁴⁷ “Al finalizar el año 2005, intentaron nuevamente incursionar en el territorio, a partir de la acción militar de las columnas móviles Arturo Ruiz, Alirio Torres, Alonso Cortes y Víctor Saavedra” (CNMH, 2014, p.300).

La vulnerabilidad productiva fue una de las condiciones para que los pobladores de la zona, principalmente los jóvenes, fuesen cooptados por los Rastrojos. El desempleo rural, las restringidas oportunidades productivas y el dinero fácil se constituyeron en coadyuvantes de esta vinculación. Al respecto uno de los pobladores refiere:

“Los únicos que daban trabajo eran los Rastrojos, trabajo ilícito, pero bien pago. La necesidad no da vergüenza y entonces muchos se fueron a trabajar con ellos. Pagaban mejor el día, acá el jornal estaba baratísimo y no había plata para pagarlo entonces la gente cogió pa’ donde esta gente” (Trujillo, septiembre de 2016).

Además, los precios del café no repuntaron, es decir, no se volvió a alcanzar el índice logrado durante el Pacto de Cuotas. Si bien es de considerar que este cultivo se constituye para el campesinado de la zona en una especie de “caja menor”. Cuando los caficultores necesitan un dinero urgente, recogen algunos kilos de café y lo bajan a la Cooperativa del Comité, instancia que asegura la compra. Sin embargo, el pago no compensa las inversiones y en este sentido las personas prefieren participar en “(...) otras actividades productivas legales e ilegales, que le garanticen el empleo y el ingreso” (CMNH, 2014, p. 370). Al respecto en una de las entrevistas se señala:

“El café, cuando necesitamos plata, vamos y cogemos las pepas. Pero si quisiéramos cosechar bien y todo, se necesita mucha gente y no la hay, porque prefieren trabajar en otro lado. Una vez estábamos en plena cosecha y la cosecha se perdió toda. Al otro lado se veía rojito de café, pero nadie venía a trabajar que porque aquí los mataban o se habían ido con los Rastrojos. Aquí era luchando uno mismo, lo que uno pudiera coger” (Trujillo, enero de 2017).

Después de la “aparente pacificación de la zona”, la fuerza de trabajo no se recompuso. Tal como hemos señalado, no fue solo el miedo, el despojo y el desplazamiento forzado, sino también la crisis de la economía campesina, crisis que en la zona comenzó desde finales de los 80 y que se relacionó directamente con la caída de los precios internacionales del café. Las políticas cafeteras, después de los 90 han tendido a desestimular la producción. La Federación ha realizado varios intentos para que los caficultores reorienten su producción a otros eslabones: plátano, frutales, yuca, cría de especies menores, ganadería, entre otros. Sin embargo, los programas de diversificación no han funcionado. Las razones de esto van más allá del bajo apoyo estatal a la producción, tienen que ver también con los efectos del conflicto armado. Uno de los entrevistados nos refiere lo siguiente:

“La salida de los armados y ya con la Ley de Víctimas, se han intentado muchos proyectos, para ver si podemos generar ingresos y salir de la pobreza. Nos están impulsando a tomar alternativas al café, pero es complicado. La vulnerabilidad en que nos dejaron los armados y la crisis la hemos apenas superado en un 50%. Peor lo que le digo es que no hay mano de obra, las familias no tienen mano de obra, no se puede contratar porque no hay a quién. Los jóvenes no se quieren quedar. Por ejemplo, en aquella finca eran unos 50 o 60 trabajadores, hoy en día habrá unos 6

trabajadores. Esa finca de allá abajito era de 35 o 40 trabajadores y ahora no hay nadie. Entonces esto está por ahí en un 50% de producción. Mire que todo lo que usted ve de rastrojo, todo eso era café” (Trujillo, enero de 2017).

“Antes esto era puro café, ahora sólo ve puro rastrojo, pero antes era puro café. Para allá arriba que no había café, ya hay café, pero en esta región de acá abajo la producción se perdió, se acabó, ya no hay producción, ahora la producción está para arriba” (Trujillo, enero de 2017).

En este contexto y tal como señala la CNMH (2014) los productores rurales tienen como opciones, o emigrar a la ciudad, o impulsar procesos de colonización en las partes altas, enfrentándose a muchas dificultades: malas carreteras, problemas de comercialización, conflictos con otros pobladores por el uso del agua y conflictos con Cartón Colombia⁴⁸.

Bibliografía

Alcaldía Municipal de Trujillo. (2001). *Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Trujillo*. Trujillo, Colombia: Autor

Bejarano, J. (1985). *Economía y Poder*. Bogotá, Colombia: Fondo Editorial CEREC.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá, Colombia: Autor.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). *“Patrones” y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012)*. Bogotá, Colombia: Autor

Chayanov, A. (1974). *La organización de la unidad económica campesina*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión.

Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz. (2014). *Trujillo, la otra versión*. Recuperado de http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/Trujillo_la_otra_version.pdf

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2008). *Trujillo: una tragedia que no cesa*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.

⁴⁸ En este aparte no haremos énfasis en los procesos de restitución de tierras, dado que es un tema en el que nos centraremos en el momento de desarrollar las relaciones entre las violencias y las vulneraciones integrales de DDHH.

- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2009). *El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual*. Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/despojo_tierras_baja.pdf
- Cuéllar, F. (2004). *El crédito cafetero en Colombia economía, instituciones y política 1920-2002*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Dávalos, P. (2011). *La democracia disciplinaria: el proyecto posneoliberal para América Latina*. Quito, Ecuador: Cooperación para el Desarrollo de la Educación Universitaria (CODEU)
- Departamento de Planeación de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. (2016). *Documentos Corporativos*. Recuperado de <http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/documentos.php?id=658>
- Díaz, D. y Otalora, F. (2000). *La mujer campesina colombiana en su lucha por la reforma agraria*. Canadá: Rights and Democracy. International Centre for Human Rights and democracy development.
- Estado reconoce 42 nuevas víctimas de masacre de Trujillo. (6 de abril de 2016). El Tiempo. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16556504>
- Fajardo, D. (julio de 2002). Situación y perspectivas del desarrollo rural en el contexto del conflicto colombiano. En (Presidencia), Situación y perspectivas para el desarrollo agrícola y rural en Colombia. Seminario llevado a cabo en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Santiago de Chile, Chile. Recuperado de www.fao.org/3/a-i3702s.pdf
- García, J. (2003). Evolución de la distribución de las fincas cafeteras. Hacia una regionalización de la caficultura colombiana. *Ensayos sobre economía cafetera*, 16(19), 193-213.
- Gudynas, E. y Acosta, A. (2011). La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa. Utopía y Praxis Latinoamericana. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, (53), 71-83.
- Guerrero, F. (2009). *Pasado, presente y futuro del trigo en el departamento de Nariño*. San Juan de Pasto, Colombia: Universidad de Nariño.
- Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Instituto Mayor Campesino IMCA. (2011). *Plan de Vida del corregimiento El Tabor*. El Tabor, Colombia: Autor

- Insuasty, A.; Valencia, J. y Restrepo, J. (2016). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia: historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)*. Medellín: Editoria Kavilando.
- Kaldor, M. (2001). *Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global*. Barcelona, España: Tusquets.
- Kalmanovitz, S. (2009). *Economía y nación una breve historia de Colombia*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma.
- León, N. (s.f.). *Una evaluación de las transformaciones rurales en Colombia desde la NGE*. Recuperado de <http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Geografiasocioeconomica/Geografiarural/11.pdf>
- Lombo, E.M. (2013). Institucionalización del género: políticas públicas, escalas sociales y representaciones sobre mujeres cafeteras. Estudio de caso en El Colegio, Cundinamarca. (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Colombia). Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/42948/1/28553361.2013.pdf>
- Machado, A. (2001). El café en Colombia a principios del siglo XX. En G. Misas (Ed.), *Desarrollo Económico y social en Colombia en el siglo XX*. (pp.77-100). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Machado, A. y Rincón, J. (2009). Informe final: *Tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca, 1960-2008*. Bogotá, Colombia: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Área de Memoria Histórica.
- Mantilla, S., (2012). Economía y conflicto armado en Colombia: los efectos de la globalización en la transformación de la guerra. *Revista Economía y Sociedad*, (2), pp. 35-73.
- Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz. (2012). *Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia* (Informe N° 5). Recuperado de <http://www.citpaxobservatorio.org/images/stories/documentos/vinforme/v.pdf>
- Morales, O. (2007a). Historia cafetera de Colombia. En O. Morales Jorge Cárdenas Gutiérrez: *Líder cafetero nacional y mundial* (91-171). Bogotá: Federación Nacional de Cafeteros.
- Morales, O. (2007b). Empresas gremiales. En O. Morales Jorge Cárdenas Gutiérrez: *Líder cafetero nacional y mundial* (497-509). Bogotá, Colombia: Federación Nacional de Cafeteros.

- Muñoz, J.C. (s.f.). *Los caminos del café: Aproximación a la relación del conflicto armado rural en la producción cafetera Colombiana*. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/eventos/archivos/Relacion_del_conflicto_armado_rural_en_la_produccion_cafetera_en_Colombia_JCMunoz.pdf
- Observatorio para la sostenibilidad del patrimonio en paisajes culturales (2010). Cátedra UNESCO. Memorias Taller Técnico “*El Paisaje Cultural y su Territorio*”. Manizales, Colombia: Artes Gráficas Tizan Ltda.
- Organización Internacional del Café. (1983). *Convenio Internacional del Café de 1983*. Recuperado de: http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/75_Convenio_I_del_Cafe_1983.pdf
- Osorio, F. E. y Villegas, H. (2010), *Uno en el Campo tiene Esperanza, Mujeres rurales y recomposición en el acceso, tenencia y uso de la tierra por el conflicto armado en Buga, Colombia*. Bogotá, Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
- Oxfam. International (2002) *Mugged: Poverty in your coffee cup*. Recuperado el 8 enero de 2017, de <https://www.oxfamamerica.org/static/oa3/files/mugged-full-report.pdf>
- Palacios, M. (1983). *El café en Colombia, 1850-1970: Una historia económica social y política*. Colegio de México. Bogotá, Colombia: El Áncora Editores.
- Palacios, M. (1989). *El café en Colombia (1850-1970) Una historia económica, social y política*. En: Nueva Historia de Colombia. Tomo III. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta.
- Palacios, M. (2009). *El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y política* (31-82). Ciudad de México, México: El colegio de México.
- Parsons (1997). *La colonización antioqueña en el occidente de Colombia*. Bogotá, Colombia: Banco de la República.
- Pérez, P. (2007). Las transformaciones institucionales en la producción y comercialización internacional del café en el siglo XX e inicios del XXI. *Problemas Del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 38(150), 107-132.
- Perfetti, M., Velásquez, L., Ortiz, O., Hernández, J. y Arango, P. (2001). *Cuantificación de los impactos micro-macroeconómicos y sociales se la crisis cafetera en Colombia*. Manizales, Colombia: Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales.

- Pizarro, E. (2004). ¿Cómo caracterizar el conflicto armado en Colombia?”. En: Una Democracia asediada, balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Bogotá, Colombia: Editorial Norma
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). *Colombia rural razones para la esperanza*. Bogotá, Colombia: Autor.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (s.f.). *Documento de apoyo: Medios de vida*. Recuperado de <http://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperacion/8-MediosdeVida.pdf>
- Ramírez, R. (2008). Conflicto, mercado y condonación. Breve historia de paro y conflictos cafeteros en los años 90. En *Historia, trabajo, sociedad y cultura. Ensayos interdisciplinarios* (pp. 113-130). Medellín, Colombia: La Carreta editores.
- Rettberg, A. (2012). Balas y tinta: conflicto armado en la zona cafetera colombiana. En M. Samper y S. Topik (eds.), *Crisis y transformaciones del mundo del café: dinámicas locales y estrategias nacionales en un periodo de adversidad e incertidumbre* (pp. 85-114). Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Rincón, J. (2005). *Trabajo, territorio y política: expresiones regionales de la crisis cafetera, 1990-2002* (pp. 67-123). Medellín, Colombia: La Carreta editores.
- Rodríguez, F. (1996). Las organizaciones del sector cafetero colombiano. *Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, (7), 7-26. Recuperado de <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19155>
- Sánchez, G. (1977). Las ligas campesinas en Colombia: auge y reflujo. Bogotá, Colombia: Ediciones Tiempo Presente.
- Tobasura, I. (2011). De campesinos a empresarios rurales. La retórica neoliberal de la política agraria en Colombia. *Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología*, 20(4), 641 – 657.
- Trejos, L. f. (2013). Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado. *Revista Enfoques*, 11(18), 55-75.

